

**INFORME DE LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA
Y REGLAMENTO** recaído en el proyecto de
ley, en primer trámite constitucional, sobre
inscripción automática, Servicio Electoral y
sistema de votaciones

BOLETÍN N° 7.338-07

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informar en general el proyecto de ley señalado en el epígrafe, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República y con urgencia calificada de "Suma".

A algunas de las sesiones que vuestra Comisión dedicó al estudio de esta iniciativa concurrieron, además de sus integrantes, los Honorables Senadores señores Gómez y Letelier, y el ex Senador señor Andrés Allamand.

En una de las referidas sesiones, la Honorable Senadora señora Alvear fue reemplazada por el Honorable Senador señor Quintana.

Asistieron, especialmente invitados, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet, y los asesores de esa Secretaría de Estado, señores Andrés Tagle, Sebastián Soto y Andrés Sotomayor.

Asimismo, a algunas de sus sesiones concurrieron los asesores de la Honorable Senadora señora Alvear, señores Jorge Claissac y Marcelo Drago; el asesor del Honorable Senador señor Walker, don Patricio, señor Fernando Dazarola; los asesores del Honorable Senador señor Quintana, señores Alvaro Pavéz y Marco Opazo, y el asesor del Honorable Senador señor Espina, señor Daniel Siebert.

Finalmente, es procedente indicar que este proyecto fue conocido por la Comisión junto a otros que versan, igualmente, sobre el sistema electoral público. Se trata del Mensaje sobre reforma constitucional relativa al voto de chilenos en el extranjero, contenido en el Boletín N° 7.335-07 y el proyecto de ley, iniciado, también en Mensaje del

Primer Mandatario, que regula los actos electorales de chilenos en el extranjero, contenido en el Boletín N° 7.358-07. Cabe destacar que este último fue retirado del trámite legislativo con fecha 15 de marzo de 2011.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo fundamental de esta iniciativa es regular un sistema automático de inscripciones electorales de manera de incorporar al padrón electoral a todas las personas que cumplan los requisitos para ejercer el derecho de sufragio. Asimismo, modificar el Servicio Electoral y modernizar el sistema de votaciones.

NORMAS DE QUORUM ESPECIAL

Cabe dejar constancia que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental, las disposiciones de esta de esta iniciativa deben aprobarse con el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, por incidir en normas de carácter orgánico constitucional, salvo sus artículos 6°, 8° y 9°, que son normas de ley común.

- - -

ANTECEDENTES

Para una adecuada comprensión de la iniciativa, deben tenerse presente los siguientes antecedentes:

A.- JURÍDICOS

a) La Constitución Política de la República consagra, en su Capítulo II, las normas básicas sobre nacionalidad y ciudadanía. En especial, el artículo 13 indica quiénes son ciudadanos y el artículo 18 dispone que habrá un Sistema Electoral Público. Agrega este último precepto, que corresponderá a una ley orgánica constitucional determinar la organización y funcionamiento del referido Sistema y un procedimiento de Registro Electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporan, por el solo Ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos en la Ley Fundamental.

b) La ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistemas de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

c) La ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

d) La ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

e) La ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

f) La ley N° 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos.

g) La ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

h) El Código Orgánico de Tribunales.

i) La ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones.

B.- DE HECHO

El Mensaje

El día 1 de diciembre de 2010, el Gobierno ingresó a trámite legislativo esta iniciativa. En su exposición de motivos, el Presidente de la República expresa que si bien nuestro país cuenta con una democracia estable y madura, ella está perdiendo fuerza y los ciudadanos, especialmente los jóvenes, están cada vez más distantes de la política.

Seguidamente, afirma que es un objetivo de su Gobierno es contribuir a remediar este problema, haciendo que la participación de los chilenos en las decisiones públicas sea cada día más activa.

Informa que, con este fin, está promoviendo un conjunto de iniciativas que apuntan a facilitar el ejercicio de los derechos políticos con los que cuentan los ciudadanos y abrir nuevos canales de participación, mencionando, al efecto, este proyecto, así como otros que promoverá este Gobierno y que están referidos, por ejemplo, a la iniciativa ciudadana de ley; a las elecciones primarias voluntarios y vinculantes para la selección de candidatos a cargos de elección popular; al cambio de las fechas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, y a la simplificación de los plebiscitos comunales para facilitar la participación directa de la ciudadanía en las decisiones de los gobiernos locales.

Hace notar que otro grupo de iniciativas vinculadas, son aquellas que persiguen incrementar la transparencia de los procesos políticos y del funcionamiento del Estado, tales como el proyecto de ley que perfecciona el deber de ciertas autoridades y funcionario de declarar sus bienes e intereses y la ley sobre fideicomiso ciego; el que perfecciona el funcionamiento del Consejo para la Transparencia, y el que implementa una Unidad de Cumplimiento de los Compromisos Presidenciales.

Anuncia que, además, en los próximos meses, el Gobierno enviará al Congreso Nacional otros proyectos de ley que contribuirán el fortalecimiento de nuestra democracia, como la iniciativa que modifica la Ley de Partidos Políticos para aumentar la transparencia de su funcionamiento y mejorar la participación de la ciudadanía en ellos.

Seguidamente, aborda los objetivos concretos del proyecto de ley que ahora se discute, es decir, la inscripción electoral automática, y la modificación del Servicio Electoral y del sistema de votaciones.

Explica que estas medidas surgen del hecho de que hay tres y medio millones de ciudadanos chilenos que no participan, que no se interesan ni siquiera por inscribirse en los registros electorales; que se observan cifras históricas de abstención histórica y de personas que votan nulo o blanco en las elecciones. En síntesis, anota que casi la mitad de las chilenas y chilenos, más de 5 millones de personas, no participan de nuestra democracia.

Agrega, además, que nuestra democracia está envejeciendo ya que cada vez menos jóvenes participan en los actos electorales, lo que se demuestra con los siguientes datos: en el plebiscito del año 88, el treinta y seis por ciento de los votantes eran menores de 29 años, proporción que, en la última elección, se redujo a menos del nueve por ciento. Es decir, acota, de los tres millones de jóvenes chilenos, sólo setecientos mil están inscritos.

En la misma línea de argumentación, pone de relieve que a partir del año 1995 nuestro padrón electoral se congeló, esto es, no crece puesto que las pocas personas que se incorporan a él, son compensadas por los que lo dejan, sea por fallecimiento o por otras razones de carácter legal.

Afirma que, en este contexto, se hace imperioso perfeccionar el sistema de inscripción y la institucionalidad electoral, lo cual se materializa estableciendo un sistema de inscripción automática.

Recuerda que este mecanismo ya se consagró en nuestra Carta Fundamental, por medio de la ley N° 20.337, que estableció el

sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción automática en los registros electorales.

Destaca que, a su vez, esa reforma zanjó la discusión en torno al voto voluntario. Si bien formula algunas reflexiones acerca de la importancia de la voluntariedad del sufragio, aclara que, con todo, este proyecto de ley no trata el voto voluntario sino que viene a complementar la mencionada reforma constitucional haciendo realidad la inscripción automática. Asegura que, de esta forma, se generarán las condiciones para que la mayor cantidad de personas participen de las decisiones públicas, dando una nueva vitalidad a nuestra democracia.

A continuación, resalta que los objetivos de este proyecto también se orientan a modernizar el sistema de votaciones y fortalecer el Servicio Electoral de modo que la interacción entre el sistema político y el electorado, que promueve el voto voluntario y la inscripción automática, vayan de la mano de un sistema de votación amigable y una institucionalidad moderna.

En este sentido, informa que el proyecto, en efecto, además de incorporar un sistema de Registro Electoral con real inscripción automática y cambio de domicilio electoral, avanza en la creación de mesas receptoras de sufragio mixtas que den prueba de la igualdad existente en nuestro país entre hombres y mujeres; en padrones electorales sujetos a auditoría y reclamación, a fin de dar todas las garantías respecto de su confección; la mayor normalidad en el día de la elección; el funcionamiento de procedimientos más transparentes para los escrutinios; donde el Servicio Electoral sea quien lleve a cabo no sólo el proceso de inscripción automática sino que también de elección, teniendo la función de entregar a la ciudadanía los resultados de los comicios. En definitiva, una institucionalidad más moderna y acorde con nuestros tiempos.

Luego, el Jefe de Estado describe el nuevo sistema de inscripción automática que propone este proyecto de ley.

Al respecto, destaca que entre sus elementos principales está la existencia de un Registro Electoral de potenciales votantes, que será llevado por el Servicio Electoral. En él se inscribirán automáticamente los chilenos nacidos en Chile al cumplir 17 años de edad y los extranjeros y chilenos no nacidos en Chile si se cuenta con antecedentes que acrediten su avecindamiento, otorgando también la posibilidad de inscribirlos a solicitud cuando aporten dichos antecedentes. Indica que para la formación de este Registro, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a todos los datos electorales del Registro Civil y Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior.

Manifiesta que el Registro Electoral se actualizará por el Servicio Electoral mediante datos proporcionados por diferentes organismos públicos y que dicen relación con fallecimientos, revocación de permisos de residencia, pérdida de ciudadanía y su recuperación, suspensión del derecho a sufragio y su recuperación y modificaciones de datos y domicilio electoral, por cuanto el objeto de este Registro es generar padrones con electores habilitados para votar en cada elección.

Pone de relieve que el domicilio electoral será aquel situado en Chile con el cual el elector tiene vínculo objetivo por residir temporal o permanentemente, ejercer profesión u oficio o desarrollar sus estudios. Éste será consultado pro activamente por el Servicio de Registro Civil al efectuar el trámite de renovación de cédula de identidad o pasaporte, actualizándolo. También se podrá modificar en las oficinas del Servicio Electoral presentando una solicitud.

También resalta que las mesas de votación serán mixtas, para lo cual los electores ya inscritos mantendrán su mesa de votación y los nuevos electores hombres se asignarán primero a las mesas ya existentes de mujeres, y las nuevas electores mujeres se asignarán a las mesas ya existentes de hombres.

En cuanto a los Padrones Electorales, manifiesta que el Servicio Electoral los preparará para cada elección incluyendo una nómina de electores inscritos inhabilitados para votar. En el proceso de formación del Padrón Electoral se elaborará primero un padrón provisorio que será objeto de auditorías efectuadas por dos empresas inscritas en el registro de la Superintendencia de Valores y Seguros, seleccionadas mediante un proceso de licitación pública. Con ello se elabora el padrón auditado, que podrá ser objeto de reclamaciones ante los Tribunales Electorales Regionales y ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Finalmente, está el padrón definitivo, que se usará para los padrones de las mesas de votación, al cual los partidos políticos tendrán acceso mediante copia impresa simple. La preparación, auditoría y reclamaciones del Padrón Electoral requiere de un cierre de actualizaciones y modificaciones al Registro Electoral de ciento veinte días antes de cada elección o plebiscito.

Precisa que el Registro Electoral no será público y el elector será notificado por carta certificada de su inscripción, suspensión de derecho a sufragio, inhabilidad para votar o cambio de domicilio electoral. Además, el elector podrá acceder a la página web del Servicio Electoral en forma permanente para revisar su inscripción, circunscripción electoral, comuna, mesa, local de votación y si está o no habilitado para votar.

Hace notar que, en cambio, el Padrón Electoral será público en la página web del Servicio Electoral después de auditado, pero contendrá solamente el rol único nacional, sexo, domicilio electoral,

circunscripción comuna y mesa. A él tendrán acceso en forma digital los partidos políticos y centros de estudio autorizados por el Consejo del Servicio Electoral, pero se prohíbe y sanciona su uso para fines comerciales.

En relación con las modificaciones que se propone introducir al Servicio Electoral, el Jefe de Estado explica que éste será un organismo con mayor independencia, dirigido por un Consejo, integrado por cinco miembros, de los cuales cuatro serán designados por el Presidente de la República con acuerdo de las tres quintas partes del Senado, durarán ocho años en sus cargos y podrán reelegirse por dos períodos. Se renovarán por parcialidades. El quinto miembro será designado por el Presidente de la República, durará cuatro años en el cargo y presidirá el Consejo.

Anuncia que los miembros del Consejo tendrán una remuneración máxima de ciento veinte Unidades de Fomento. Sus acuerdos serán por mayoría de cuatro miembros en primera instancia y de tres si no hay acuerdo, previa publicación del desacuerdo. Para designar al Director y Subdirector del Servicio Electoral, deberá haber mayoría de cuatro miembros.

Además, enumera algunas de las funciones del Consejo, como la de designar y supervisar al Director y Subdirector de la institución, aprobar los Padrones Electorales, aprobar las bases para la licitación de las empresas de auditoría y determinarlas, y designar a los miembros de las Juntas Electorales.

Luego, el Primer Mandatario describe las modificaciones que esta iniciativa introduce a la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios con el objetivo de modernizar el sistema de votaciones.

Al respecto, señala, en primer término, que se simplifica la inscripción de candidaturas, pues ahora será por candidato y separadas del pacto electoral. Además, se requerirá una sola declaración jurada del candidato que puede incluir al Administrador Electoral y como documento de respaldo, solo el de estudios. Por último, los errores en los patrocinios de independientes no inhabilitan la inscripción si se cumple con los requisitos.

En segundo lugar, advierte que se elimina la obligación a los municipios de colocar murales con nombres de los candidatos. Destaca, también, que en cuanto a los Vocales de Mesa, esta función pasa a ser obligatoria, pero con una mejor remuneración. Serán designados por sorteo entre los treinta electores más capacitados, elegidos por la Junta Electoral, durarán cuatro años y se renovarán por parcialidades: tres se designan para la elección presidencial y dos para las municipales.

Destaca, además, que las Mesas se constituirán el sábado anterior a la elección y habrá una capacitación disponible para los Vocales con asistencia voluntaria y que los Delegados de la Junta Electoral en los locales de votación serán auxiliares de la Administración de Justicia; no podrán ser funcionarios municipales o dependientes de éstas, y tendrán una remuneración de cinco unidades de fomento por acto electoral.

En lo que dice relación con los útiles electorales, informa que el Padrón Electoral tendrá espacio para la firma, eliminándose por ende el cuaderno adicional de firmas y la tinta indeleble.

Respecto del horario de funcionamiento de las Mesas, explica que él será fijo, de 08:00 a 18:00 horas, salvo que queden electores por votar en la Mesa, por lo cual los vocales deben llegar a las 8 de la mañana y en caso de constitución forzada de mesas, el Delegado deberá hacerlo entre las 9:00 y las 10:00 hrs., prefiriendo a los voluntarios en orden de presentación, o bien, designarlos de entre los electores que voten en el mismo local de votación.

En cuanto al sufragio, señala que se podrá votar con cédula de identidad o bien con pasaporte. Asimismo, que el elector deberá sufragar en todas las elecciones que se realizan en un mismo acto electoral y, además, que una misma persona no podrá asistir a más de un votante por Mesa, salvo a parientes.

En lo que dice relación con los escrutinios, el Mensaje define lo que se debe entender por voto nulo, blanco, marcado u objetado; elimina cualquier suma de votos por lista; dispone que se llenará una sola minuta que se publicará en un lugar visible; que las actas se podrán fotocopiar luego de llenada la primera y antes de las firmas, siendo el original para el Tribunal Calificador de Elecciones, una copia para el Servicio Electoral que se digitalará en la oficina electoral del local y una segunda copia para el Colegio Escrutador que se entregará en sobre cerrado por el Delegado del local. Con ello, concluye, se evita que los Presidentes de Mesa deban concurrir al Colegio Escrutador al día siguiente.

Respecto de los Apoderados de Mesa, informa que el poder ante Notario será sólo para los Apoderados Generales, los demás se constituirán con poder simple otorgado por el Apoderado General presente en el local de votación; que se identificarán con una credencial colgada al pecho que identifique el candidato o partido que representan y que tanto la credencial como las carpetas que los apoderados utilicen serán reguladas por el Servicio Electoral.

Asegura que con estas modificaciones también se pretende lograr una mayor normalidad el día de las elecciones o plebiscito, permitiendo reuniones que no tengan carácter político. Las que tengan este

último carácter sólo se podrán celebrar dos horas después del cierre de la votación. En la misma condición quedan los eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo. También se prohibirá el comercio del alcohol entre las cinco horas que anteceden a una votación y las dos horas que siguen al término de la misma.

En cuanto a los cómputos el día de la elección, señala que ello pasa a ser función del Servicio Electoral y se hará a través de la digitalización de los datos en cada local con presencia de los apoderados, a través del uso de sistemas OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres). Esta digitalización podrá ser usada como base a revisar en los Colegios Escrutadores, además, permitirá el acceso inmediato a los resultados en la página electrónica del Servicio Electoral, tanto por Mesa como por comunas, distrito, provincia, circunscripción senatorial o región. También los partidos políticos podrán disponer de resultados en medios digitales para su procesamiento.

Resalta que los miembros de los Colegios Escrutadores serán seleccionados por las Juntas Electorales, contarán con sistemas computacionales cargados con la digitación efectuada en los locales el día anterior y revisarán los resultados por Mesa, corrigiendo y completando. Los Delegados del local serán los encargados de llevar las actas en sobres cerrados. Los partidos políticos podrán disponer de resultados en medios digitales para su procesamiento.

Agrega que el Tribunal Calificador de Elecciones tendrá sesiones públicas, con un procedimiento más transparente para los escrutinios y resolución de solicitudes de rectificación, especialmente sobre actas faltantes, contradictorias o descuadradas. El Padrón Electoral incorrecto puede ser causa de nulidad.

Finalmente, indica que el Tribunal Calificador de Elecciones tendrá la facultad de reglamentar los procedimientos comunes que deban aplicar Tribunales Electorales Regionales.

.-.-.-

Hacemos presente que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes de la Carta Fundamental y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se consultó la opinión de la Excelentísima Corte Suprema sobre esta iniciativa, toda vez que algunas de sus disposiciones dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.

Opinión de la Excma. Corte Suprema

La Corte comunicó su parecer sobre esta iniciativa mediante el Oficio N° 21-2011, de 25 de enero recién pasado, cuyo texto es el siguiente:

“Por Oficio N° 1.046, de 1 de diciembre último, el Presidente del H. Senado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, ha requerido de esta Corte informe respecto del proyecto de ley sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 10 de enero último, presidida por su titular don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Sergio Muñoz Gajardo, Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, señora Sonia Araneda Briones, señores Carlos Künsemüller Lobenfelder, Haroldo Brito Cruz, Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa María Maggi Ducommun y Rosa Egnem Saldías, acordó informarlo favorablemente al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

“Santiago, veinticuatro de enero de dos mil once.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que por Oficio N° 1.046/SEC/10 del señor Presidente del H. Senado, de 6 de diciembre último, se ha recabado informe de Corte Suprema sobre el proyecto de ley -iniciado en mensaje- sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

El proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas legales que tienen por objeto, según se señala en el mensaje, “facultar el ejercicio de los derechos de participación política con los que cuentan los ciudadanos y abrir nuevos canales de participación”. En particular, el presente proyecto pretende perfeccionar el sistema de inscripción y la institucionalidad electoral, lo cual se materializa estableciendo un sistema de inscripción automática”. Además, como se consigna también en el Mensaje, el proyecto “no trata el voto voluntario sino que viene a complementar la mencionada reforma constitucional (la introducida por la Ley N° 20.337 publicada en el Diario Oficial el 4 de abril de 2009, que modificó los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental) haciendo realidad la inscripción automática”.

Segundo: Que el proyecto consta de nueve artículos permanentes y siete artículos transitorios:

a) el artículo 1° modifica la Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

b) el artículo 2° introduce modificaciones a la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

c) el artículo 3° modifica la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior.

d) el artículo 4° modifica el inciso tercero del artículo 83 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior.

e) el artículo 5° introduce modificaciones a la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos.

f) el artículo 6° modifica la Ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral,

g) el artículo 7° modifica el artículo 9 de la Ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones.

h) el artículo 8° establece que el mayor gasto que irroque la aplicación de la ley se financiará con los recursos que se aprueben en los respectivos presupuestos anuales del Servicio Electoral,

i) finalmente, el artículo 9° establece que la ley comenzará a regir 60 días después de su publicación en el Diario Oficial, salvo en lo que se refiere al artículo 23 de la Ley N° 18.556, que comenzará a regir el primer día hábil del tercer mes siguiente al de la publicación de la ley.

Es del caso señalar que en el acápite V (“Contenido Especifico del Proyecto”), ubicado en la página 6 del Mensaje, se señala que se modifica el Código Orgánico de Tribunales, sin embargo en ninguna parte de la iniciativa legal se encuentra alguna modificación a dicho cuerpo legal.

Tercero: Que respecto de las modificaciones que el proyecto propone introducir en la Ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales, esta Corte Suprema informa lo siguiente:

i) La obligación, establecida en el nuevo artículo 17, de los Juzgados de Garantía y de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, de informar mensualmente al Servicio Electoral sobre las personas respecto de las cuales se ha presentado acusación o han sido condenadas por determinado tipo de delitos (que merezcan pena aflictiva o que la ley califique como conducta terrorista), o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos, parece razonable y no merece objeciones, atendidos los efectos electorales que dichas situaciones producen. En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 Nº 2 de la Constitución Política de la República, el derecho de sufragio se suspende por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Por su parte, los numerales 2 y 3 del artículo 17 de la Carta Fundamental establecen que la calidad de ciudadano se pierde por condena a pena aflictiva y por delitos que la ley califique como conducta terrorista.

Sin embargo, este Tribunal estima de importancia concordar la norma que se propone con el precepto constitucional antes citado, en el sentido que la persona debe “hallarse acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista”.

También, en otro orden de ideas, puede considerarse de interés precisar que la información que deben entregar los Jueces de Garantía al Servicio Electoral es la nómina de las personas cuyas inscripciones se deben cancelar.

ii) Respecto del nuevo artículo 18, relativo al deber de los jueces de letras de informar al Servicio Electoral los casos de interdicción por causa de demencia, cabe señalar que esta disposición es similar al actual artículo 56 de la ley, pero además incluye el deber de comunicar las revocaciones de las declaraciones de interdicción. Este Tribunal manifiesta un parecer favorable en relación a este precepto que se propone.

iii) El nuevo artículo 21, que establece el deber de los tribunales señalados en el Párrafo 4º del nuevo Título I, de proporcionar antecedentes requeridos por el Servicio Electoral, no merece objeciones.

iv) Parece justificada, en concepto de la Corte Suprema, la disposición establecida en el inciso final del nuevo artículo 65, y

que establece que en las causas civiles que se intentaren en contra de un Consejero o del Director del Servicio Electoral, conocerá en primera instancia un Ministro de Corte de Apelaciones y en segunda instancia la misma Corte de que ese Ministro forma parte, pero se estima preferible que se incorpore a estas autoridades en la nómina a que se refiere el N° 2 del artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales, que establece como tribunal competente para conocer en primera instancia de las causas civiles en que sean parte o tengan interés las personas que allí se señalan, a un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, excluyéndose, de esta forma, como se propone en el proyecto, la competencia exclusiva de un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Cuarto: Que en relación a las modificaciones introducidas por el proyecto en la Ley N° 18.700, de Votaciones Populares y Escrutinios, y que deben ser informadas por la Corte, cabe concluir lo siguiente:

i) La modificación del artículo 40, consistente en establecer que no podrán ser electos vocales de mesa “los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local”, es más amplia y clara que la actual, que dispone que no podrán ser vocales “los jueces letrados y los de Policía Local”. No obstante lo anterior, el Tribunal Pleno considera aconsejable precisar el precepto en el sentido de indicar que no podrán ser vocales de mesa “los jueces de los tribunales a que se refiere el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de los jueces árbitros”.

ii) La modificación del artículo 54, en la práctica, amplía a todo auxiliar de la administración de justicia las personas que pueden ser nombradas como Delegado de la Junta Electoral. La Corte Suprema estima aconsejable mantener la norma actualmente en vigor - Notarios Públicos, Receptores Judiciales y Secretarios de Juzgados de Letras o de Policía Local-, agregando únicamente a los Conservadores de Bienes Raíces y Archiveros Judiciales, de manera tal de no entender incorporados como eventuales Delegados de la Junta Electoral a auxiliares de la administración de justicia que forman parte del Escalafón Primario del Poder Judicial o entre otros funcionarios judiciales que de acuerdo a la ley tienen el carácter de ministros de fe.

iii) La modificación del artículo 86 se la informa favorablemente, ya que constituye una adecuación de la disposición actual a la Reforma Procesal Penal, al establecer la remisión de actas del Colegio Escrutador al “Juzgado de Policía local correspondiente” y no al “juez del crimen respectivo”, como reza la actual disposición.

iv) La modificación del artículo 153, relativa a la obligación de denunciar ante los “jueces de policía local de la comuna correspondiente a la respectiva circunscripción electoral”, a los miembros de

las Juntas Electorales, Mesas Receptoras, Colegios Escrutadores y Delegados de las primeras, que hubieren incurrido en omisiones en el cumplimiento de las funciones que establece la ley, no merece reparos, en el entendido que se excluye de la posibilidad de ser Delegados de las Juntas Electorales a las personas indicadas en el punto que antecede.

v) En cuanto al nuevo texto del artículo 160, esta Corte lo informa favorablemente, reiterando en todo caso lo expresado en el punto i), en orden a precisar que no pueden ser designados apoderados “los jueces de los tribunales a que se refiere el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de los jueces árbitros”.

vi) Los nuevos artículos 184 y 185, que establecen que las Juntas Electorales se integrarán con los auxiliares de la administración de justicia que se mencionan, corresponde informarla favorablemente.

vii) Respecto del artículo 186 del proyecto, se lo informa desfavorablemente en cuanto se refiere en forma genérica a los ministros de fe auxiliares de la administración de justicia, por las mismas razones expuestas en el punto signado ii).

Quinto: Que la modificación del artículo 119 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece la obligación de las instancias jurisdiccionales electorales de poner en conocimiento del Juzgado de Garantía competente aquellos hechos o circunstancias fundantes de la reclamación, que a su juicio revistieren las características de delito, se la informa favorablemente, ya que constituye una adecuación de la disposición legal a la Reforma Procesal Penal, En efecto, actualmente dicho artículo establece que esos hechos deben ponerse en conocimiento del “tribunal del crimen competente”.

Por estas consideraciones y en conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar favorablemente el referido proyecto de ley, con las observaciones antes indicadas.

Se previene que los señores Ministros de esta Corte, don Sergio Muñoz Gajardo, doña Margarita Herreros Martínez, don Pedro Pierry Arrau y don Haroldo Brito Cruz, que a su vez integran el Excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones, fueron de la opinión de manifestar respecto del Boletín Legislativo N° 7.333-07, además, lo siguiente:

I.- Respecto de la Inscripción Automática.

La inscripción automática se consagró con la reforma constitucional aprobada en Abril de 2009, con el objeto de lograr

mayor participación ciudadana y facilitar el ejercicio del sufragio. Para ello el constituyente consideró que el hecho de recaer sobre los ciudadanos la obligación de inscribirse en los Registros Electorales, afectaba el ejercicio del derecho de sufragio, elevando los costos del acto electoral y desmotivando la participación.

En consecuencia, cada individuo que cumpla los requisitos para ejercer derechos electorales deberá formar automáticamente parte del Registro.

El proyecto de ley (Boletín N° 7.338-07) que implementará esta reforma constitucional, ha encomendado al Servicio Electoral la obligación de llevar el Registro Electoral, el que deberá inscribir a los potenciales votantes conforme a la información proporcionada por distintos organismos, principalmente el Servicio de Registro Civil e Identificación, con el objeto de generar padrones con electores aptos para votar en cada elección.

Un Registro Electoral oportuno, eficiente, transparente, será clave para el fortalecimiento y consolidación de la democracia.

Conforme a las reflexiones derivadas de las distintas misiones internacionales en que se ha participado como de las Conferencias y Seminarios a los que se ha asistido y patrocinado, permiten destacar la relevante función que le corresponde a las autoridades vinculadas, en regímenes de inscripción automática, que el Padrón Electoral que participe se encuentre actualmente depurado colacionando eficientemente a aquellos electores idóneos de participar de aquellos inhabilitados de hacerlo.

II.- Respecto de la facultad del Tribunal Calificador de Elecciones de calificar los comicios de Presidente de la República, Senadores y Diputados.

El Tribunal Calificador de Elecciones, desde 1925, se encarga constitucionalmente de practicar la calificación de las elecciones, además de conocer y fallar las reclamaciones electorales, privando a las Cámaras de su antigua facultad de calificar la elección de sus respectivos miembros, pues el procedimiento anterior a la década de los años veinte contenía un riesgo de hacer primar el aspecto político por sobre el pronunciamiento ciudadano.

Los Tribunales que componen la Justicia Electoral actúan sobre la base de competencias que los habilitan para cautelar los derechos de quienes desean optar a ser electos, desde la formulación de

candidaturas hasta las impugnaciones de las mismas, que permitan determinar las nóminas de candidatos.

El procedimiento por el cual el electorado emite su pronunciamiento o votación, se controla a posteriori, por medio de las actuaciones como la recolección directa de los resultados que le son enviados por el órgano primario que recibe la expresión ciudadana -las Mesas Receptoras de Sufragios- además de quien las agrupa, los Colegios Escrutadores, información original de la fuente primaria con la que se califica el proceso electoral.

La calificación es el acto jurídico complejo por el que los órganos de la Justicia Electoral ponderan, conforme a los principios obligatorios de orden público como los de legalidad, trascendencia, oportunidad y certeza, apreciando los hechos como jurado, la validez o invalidez de una elección, teniendo todos los antecedentes a la vista, única forma de responder al principio de motivación de sus decisiones.

El Tribunal Constitucional ha definido el proceso de calificación en el considerando 12° de su sentencia de 24 de Septiembre de 1985 (Rol 33), expedida en relación al proyecto de Ley Orgánica Constitucional relativo al Tribunal Calificador de Elecciones, citando para estos efectos -precisamente-jurisprudencia de este último Tribunal, en los siguientes términos: “Calificar una elección es, por lo tanto, apreciar o determinar las calidades de ella y las circunstancias en que se ha realizado, a fin de establecer si se han seguido fielmente, los trámites ordenados por la ley y si el resultado corresponde a la voluntad realmente manifestada por los electores, en una decisión libre y sin coacciones”.

Asimismo la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, de mayo de 1949, sobre nulidad de candidatura de Juan Lamatta González, en su considerando 2°, ha dicho que la calificación es “establecer si la elección se ha verificado en conformidad a las disposiciones que la rigen y así poder declarar, no sólo quienes han resultado elegidos, sino también si lo han sido legítimamente (Silvia Bascuñan Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, tomo II, página 184). Estos razonamientos expresados a propósito de las funciones del Tribunal Calificador, respecto de las elecciones son, en su esencia, igualmente válidos para los actos plebiscitarios”.

El Tribunal Calificador de Elecciones es el único Órgano del Estado que -por antonomasia- es el encargado de calificar las elecciones de carácter nacional (y comunales en el caso de los plebiscitos); su quid está en desarrollar esta actividad jurisdiccional con efecto de cosa juzgada y no se justifica, sino en perjuicio de la unificación de criterio por una autoridad independiente y especializada, restringir su competencia a las reclamaciones de lo obrado por los Colegios Escrutadores. Está dentro de la

esencia del ejercicio su competencia de ponderar la prueba como jurado pero sentenciar conforme a derecho, esto es, fundadamente -como lo ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en los autos Rol 1.373-2009-. Para que este Tribunal cumpla con el mandato constitucional, es decir, calificar fundadamente, debe contar con todos los elementos de juicio y entregar al país el resultado de su trabajo que no es otro que el reflejo fidedigno de la voluntad popular.

Para que el Tribunal pueda proceder acertadamente a la calificación de un acto electoral, debe contar con la totalidad de la información de la votación y debe tener los resultados paralelos para practicar el cotejo o conciliación de la información electoral. La conciliación de la información electoral, contenida en las Actas de Mesas Receptoras de Sufragios y en las Actas de los Colegios Escrutadores, es la única forma cierta de recoger la verdadera manifestación de la voluntad popular.

Para llevar adelante este procedimiento jurisdiccional el legislador ha entregado facultades privativas a la Justicia Electoral para recoger de las distintas fuentes primarias los resultados electorales: Actas de los Colegios Escrutadores, Actas de Mesas que obran en poder del Servicio Electoral, Actas adosadas en los Registros que estén en poder de los Secretarios de las Juntas Electorales y, además, y en defecto de las anteriores, practicar públicamente el escrutinio de las cédulas electorales que se guardan en las cajas de material electoral.

Recibida la información, el Tribunal realiza de manera pública las diligencias que preceden a su decisión, como el escrutinio de alguna Mesa Receptora de Sufragios. El conteo se realiza en presencia de los interesados, calificando, en su caso, cada voto, fundando su parecer, de lo cual queda constancia en el acta respectiva.

Una vez practicada la calificación del respectivo proceso y resueltas las reclamaciones de nulidad y/o rectificaciones de escrutinios, el Tribunal confecciona el escrutinio general, operación que culmina, por aplicación de las normas de sucesión legal de las autoridades, con la proclamación de los candidatos electos.

Con la convicción de que la aplicación del principio de transparencia sólo reporta garantías a la ciudadanía y prestigio al sistema, el Tribunal Calificador de Elecciones, en forma inédita a nivel nacional e internacional, desarrolló un conjunto de acciones destinadas a que la ciudadanía tuviera acceso directo, vía página electrónica del Tribunal, a las Actas de las Mesas Receptoras de Sufragios y a las Actas de los Colegios Escrutadores.

De la experiencia recogida y de la historia democrática del país que se funda en la existencia de órganos garantistas, autónomos, independientes y supervigilantes de los procesos electorales, como de los desafíos actuales que nos propone la tecnología, es que resulta de suma importancia manifestar el propósito de seguir fortaleciendo la certeza y publicidad de los actos eleccionarios, implementando los mecanismos de captura de datos in situ y publicidad de la información de las Actas de Mesas Receptoras de Sufragios y de Colegios Escrutadores de manera instantánea, a través de la página electrónica del Tribunal Calificador de Elecciones. En consecuencia, se debe privilegiar que sea un órgano autónomo e independiente, en concordancia con el artículo 95 del Código Político, el que practique la calificación del proceso electoral, conozca y resuelva las reclamaciones de nulidad y de rectificaciones de escrutinios, forme el escrutinio general oficial y proclame a las autoridades electas.

Sin embargo, llama la atención que la proposición del proyecto de ley (Boletín 7.338-07) se aparte de la doctrina internacionalmente aceptada, en cuanto debe ser un tercero imparcial del Gobierno, del Parlamento, de los partidos políticos, y de los candidatos, el que reúna los resultados.

No parece acertado que el proyecto entregue la recopilación y procesamiento de los datos de las Mesas Receptoras de Sufragios y su posterior publicación parcial, al nuevo Servicio Electoral, reduciendo la labor de la Justicia Electoral al conocimiento de las reclamaciones de nulidad y solicitudes de rectificación de escrutinio.

Se hace un deber llamar a la reflexión sobre la necesidad de mantener en la Justicia Electoral la formación consolidada del escrutinio general, incorporando las tecnologías actuales y futuras, en aras de sistemas democráticos confiables, prestigiados, sólidos y autónomos en la solución pacífica de los conflictos electorales.

Desviar las atribuciones y prescindir del Tribunal Calificador de Elecciones, puede tener visos de inconstitucionalidad, en atención a que la formación del escrutinio general por ser parte de la calificación de las elecciones, es una atribución exclusiva del Tribunal Calificador de Elecciones, según lo establecido en el artículo 95 y siguientes de la Constitución Política de la República. Tanto es así que la norma en actual vigencia, que radica en el Gobierno la función de informar, no priva al Tribunal Calificador de Elecciones de poder implementar su propio procedimiento. Con la reforma propuesta esta función se tornaría incompatible, dado que se atribuye un carácter definitivo a los resultados que se incorporen por el Servicio, los que el Tribunal estará obligado a utilizar,

Este razonamiento permite plantear una posible cuestión de constitucionalidad respecto de toda iniciativa que pretenda

relativizar, mediatizar o tornar indirecta la confección del escrutinio general o la calificación de las elecciones de Presidente de la República, Diputados y Senadores, en tanto se mantenga la actual normativa constitucional.

En efecto, no se observan en el proyecto argumentaciones que permitan inferir, desde el punto de vista de la justicia electoral, las razones por las cuales se insiste en imponer a la máxima autoridad electoral del país lo obrado por la autoridad administrativa dependiente de la autoridad política.

III.- Respecto del Consejo Directivo del Servicio Electoral.

El proyecto de ley (Boletín N° 7.338-07) crea una nueva estructura orgánica para implementar la función administrativa de los actos electorales. Se trata de un Consejo Directivo del Servicio Electoral.

El proyecto de ley propone este cuerpo colegiado - Consejo Directivo del Servicio Electoral- compuesto por cinco miembros que serán designados por la máxima autoridad ejecutiva -el Presidente de la República-, cuatro de ellos con acuerdo del Senado; y un Director del Servicio Electoral de designación directa del Consejo,

El consejero de designación exclusiva y excluyente del Presidente de la República, cuya duración es de cuatro años, coincide con el periodo presidencial. Esta propuesta resulta ajena a la independencia y autonomía anheladas; sin perjuicio que igual reparo, aunque menos patente, se debe hacer a la designación de los otros consejeros y del propio Director.

El proyecto pretende entregar el control y manejo de la base documental (actas de escrutinio) al Servicio Electoral a través de la incorporación de los datos obtenidos de las actas de las Mesas Receptoras de Sufragios a las bases computacionales de dicho Servicio. Esta privación de competencia al Tribunal Calificador de Elecciones y desvío de atribuciones hacia el Servicio Electoral, con serios visos de inconstitucionalidad, tiene el riesgo de crear situaciones difíciles con gran impacto en el orden social especialmente en los casos de resultados estrechos.

La actual integración del Tribunal Calificador de Elecciones, que finaliza el desempeño de sus funciones constitucionales el 30 de enero de 2012, es de opinión de que el legislador debe propender a otorgar una justa forma de retribución para los miembros de este máximo órgano electoral del país.

No se advierte la lógica de disparidad, desigualdad y desproporcionalidad que existe entre las rentas que establece el proyecto de ley -para los Consejeros del Consejo Directivo del Servicio Electoral, de 30 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 120 unidades de fomento, por mes calendario, percibiendo el Presidente del Consejo (o quien lo subrogue) igual renta, aumentada en un 50%- y, las de un ministro del Tribunal Calificador de Elecciones que percibe una remuneración equivalente a 4 unidades tributarias mensuales por cada audiencia a que concurran, con un máximo por cada mes calendario de veinte unidades tributarias mensuales.

IV.- Facultades conservadoras, disciplinarias y económicas del Tribunal Calificador de Elecciones respecto de los Tribunales Electorales Regionales.

El presente proyecto de ley (Boletín N° 7.338-07) en su artículo 7° modifica el artículo 9 de la Ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones, otorgando competencia al Tribunal Calificador de Elecciones para reglamentar procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales, con el objeto de propender al mejor ejercicio de la función jurisdiccional electoral.

Esta nueva competencia nace de la necesidad de otorgar coherencia y homogeneidad a los distintos procedimientos sustanciados por los Tribunales Electorales Regionales, debido a que el uso de sus facultades de dictar autos acordados ha originado, en la práctica, la pérdida de la unificación de los procesos jurisdiccionales, afectándose - horizontalmente a través del país- principios y garantías constitucionales.

La competencia propuesta, es decir, la de reglamentar por el Tribunal Calificador de Elecciones los procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales, se vislumbra como un acercamiento a un carácter más homogéneo y eficaz de la labor procesal electoral, pero no constituye una medida suficiente, la que se vería completada por la entrega de la superintendencia directiva, correccional y económica sobre los Tribunales Electorales Regionales.

Tener la posibilidad de ejercer la función directiva, se condice con la superioridad jerárquica del Tribunal Calificador de Elecciones como máximo órgano electoral del país. Así también la función correccional, que permite aplicar determinadas sanciones o adoptar determinadas medidas, a fin de obtener el cumplimiento de las normas legales que rigen la conducta ministerial y funcionaría. Esta superintendencia permitiría además ejercer las facultades económicas, con el objeto de decretar medidas tendientes a obtener una más pronta y mejor administración de justicia, a través de la dictación de normas e instrucciones.

V.- Respecto a la suspensión del derecho a sufragio.

La Constitución Política de la República, en su artículo 16, numeral 2°, señala que el derecho a sufragio se suspende: 2° “por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista”.

La disposición constitucional atribuye como efecto inmediato y objetivo de la acusación penal, la suspensión del derecho de sufragio, lo que entra en directa contradicción con la presunción de inocencia de toda persona que sea sujeto de una investigación por hechos que revistieren los caracteres de delito.

La acusación, requisito de procedencia de la suspensión, es sostenida por un órgano administrativo o por un particular, y el juez de garantía sólo efectúa a su respecto, un análisis formal de la concurrencia de los requisitos previstos en los artículos 259 y siguientes del Código Procesal Penal, sin examinar la concurrencia de hechos y fundamentos de derecho que la hagan procedente, labor que corresponde al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.

La suspensión del derecho a sufragio -derecho fundamental- se debe fundar en la existencia de una condena firme y ejecutoriada que conlleve la pérdida del derecho como sanción ante la culpabilidad del sujeto y no como consecuencia de un acto procesal.

Además y complementando lo anterior, el proyecto de ley (Boletín N° 7.338-07) incorpora un nuevo artículo 17 a la Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, estableciendo la obligación de los Juzgados de Garantía y de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, de informar mensualmente al Servicio Electoral sobre las personas respecto de las cuales se ha presentado acusación o han sido condenadas por determinado tipo de delitos (que merezcan pena aflictiva o que la ley califique como conducta terrorista), o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos, parece de importancia precisar que no basta la presentación de una acusación sino que es jurídicamente necesario que exista una resolución del Tribunal de Garantía que se refiera a su admisibilidad.

Los tratados internacionales, ratificados y vigentes en Chile, así lo confirman. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) señala en su artículo 21° que: “1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.”

El artículo 23 N° 2 de “La Convención Americana sobre Derechos Humanos” (1969), por su parte, consagra “La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.

Por tanto, la suspensión del derecho a sufragio por hallarse la persona acusada por delito, vulnera el principio internacional de *pacta sunt servanda* de que todo tratado en vigor obliga a las partes.

Nuestro ordenamiento constitucional establece como límite a la soberanía los derechos esenciales reconocidos por la Carta Fundamental y en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.

VI.- Respecto del voto del chileno en el extranjero.

Aunque no es un punto contenido en este proyecto de ley en análisis, pues aquel se contiene en el Boletín N° 7.358-07, parece importante señalar que el ejercicio del sufragio, se asocia con la calidad de ciudadano, la cual se encuentra regulada en el artículo 13 de la Constitución Política, que señala que: “son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva”, reconociendo, en su inciso 2°, a los ciudadanos el derecho de sufragio. En otras palabras, la Carta Fundamental reconoce el derecho de sufragio sin establecer exigencias -salvo- los requisitos genéricos relativos a la nacionalidad, edad y no haber sido condenado a pena aflictiva.

Resulta, en consecuencia, indispensable establecer mecanismos destinados a que los ciudadanos chilenos se encuentren, en todo momento, en posibilidad de ejercer su derecho de sufragio, lo cual abarca tanto a los nacionales que se encuentren en el país, como a los que residen en el extranjero, siempre que cumplan los requisitos constitucionales.

La residencia de un chileno en el extranjero no puede ser factor de discriminación en el ejercicio de los derechos consagrados por el legislador respecto de un chileno que habita en Chile, como tampoco podrá serlo la exigencia de un vínculo con el país o la condición de permanencia, durante un determinado tiempo anterior a los comicios.

Implica una contravención a artículo 5° de la Constitución Política de la República, el limitar el derecho a sufragio, estableciendo condiciones para su ejercicio que vulneran el principio de igualdad ante la ley.

La universalidad del derecho a sufragio ha dejado atrás los requisitos establecidos por el otrora “sufragio censitario”, al que se estaría retrocediendo de exigirse condiciones para que los chilenos ejerzan el derecho a sufragio en el extranjero.

De esta manera cabe concluir que el Tribunal Calificador de Elecciones es de opinión de consagrar el derecho del chileno a sufragar en el extranjero, sin más exigencias que las impuestas a los chilenos en Chile.

VII.- Respecto a la votación de personas privadas de libertad.

Del mismo modo no es capítulo tratado en este proyecto de ley. Sin embargo resulta de interés señalar que, conforme a lo dicho en el punto anterior y a la improcedencia de suspender el derecho a sufragio a quien haya sido acusado y no condenado por sentencia firme y ejecutoriada, es necesario plantear los mecanismos que hagan efectivo que las personas que se encuentren privadas de libertad y que no se encuentren condenadas, puedan ejercer su derecho a voto.

La Constitución Política de la República en su artículo 1°, asegura el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Para cumplir con este mandato constitucional será necesario implementar una política reglamentaria y estructural que permita el ejercicio igualitario del sufragio en los centros penitenciarios, predeterminando las condiciones bajo las cuales los privados de libertad puedan votar.

Será necesario la consideración de variables tales como: determinación de quiénes podrán acceder al voto en los centros penitenciarios, acceso de los electores a la documentación electoral necesaria (cédula de nacional de identidad vigente), inscripción en la respectiva mesa receptora de sufragios (solicitando previa y oportunamente el traslado correspondiente), evaluación de los distritos electorales necesarios que contemplen a los centros penitenciarios como locales de votación, instalación de mesas receptoras de sufragios en los centros penales que tengan las mismas características y reglas de funcionamiento que rigen a las demás del país, medidas de seguridad apropiadas para el adecuado funcionamiento del local de votación, acceso a la información electoral y propaganda político-partidista en los centros penitenciarios, designación de funcionarios electorales ad-hoc para recepción y escrutinio de las respectivas mesas; entre otras variables.

Permitir el sufragio de las personas privadas de libertad es una medida de inclusión y profundización democrática, que aspira a una mayor equidad en la participación política de todos los ciudadanos y a una más intensa promoción de sus derechos humanos,

Conviene mencionar que, con el objetivo de potenciar la participación electoral -en condiciones de igualdad- de toda la población, es necesario siempre atender a las características de sectores sociales que tienen dificultades en el ejercicio del sufragio tales como; las personas con discapacidad, hospitalizados, adultos mayores, poblaciones indígenas y los ya tratados privados de libertad.

Se deja constancia, asimismo, que el Presidente señor Juica comparte lo expresado en los dos primeros párrafos del punto III.- de la prevención precedente.”.

.-.-.-

DISCUSIÓN EN GENERAL

La Presidenta de la Comisión, **Honorable Senadora señora Alvear**, puso el proyecto de ley en estudio en discusión en general.

En primer lugar, hizo uso de la palabra **el Ministro señor Larroulet**, quien hizo presente que esta iniciativa se enmarca en el propósito de este Gobierno de contribuir a fortalecer nuestro sistema democrático. Explicó que ella recoge el conjunto de observaciones que formularon diversos especialistas –que representan a distintas sensibilidades políticas- respecto de las modificaciones que es necesario efectuar para adecuar nuestra legislación electoral al nuevo marco constitucional.

Agregó que ella da cuenta, además, de las proposiciones que el Servicio Electoral formulara al proyecto que sobre esta misma materia ya ha conocido y discutido la Comisión. Propuso que el Mensaje que ahora ha ingresado el Gobierno, sea aprobado a la brevedad, para que alcance a regir en la elección de las autoridades locales que debe realizarse en octubre de año 2012.

Recordó que ya se ha alcanzado un consenso en cuanto a la idea de legislar contenida en esta iniciativa, lo cual se manifestó al aprobarse el proyecto contenido en el Boletín N° 6.418-07 y que fuera presentado por la ex Presidenta de la República, señora Bachelet. Agregó que, en consecuencia, lo que correspondía en esta oportunidad era cumplir con este trámite nuevamente e iniciar, cuanto antes, la discusión en particular de esta iniciativa.

Concluyó su intervención manifestando que durante la referida discusión en particular, la Comisión debería invitar a expertos electorales y, en especial, a funcionarios del Servicio Electoral.

En seguida intervino **el Honorable Senador señor Letelier**, quien manifestó que no era posible avanzar en el proyecto que regula la inscripción automática, sin que previamente exista un pronunciamiento que permita a los chilenos que viven en el extranjero, ejercer el derecho de sufragio que les reconoce la Constitución Política.

El Honorable Senador señor Chadwick expresó que, sin perjuicio de pronunciarse sobre reforma constitucional que se refiere al ejercicio del derecho de sufragio de los chilenos que viven en el exterior, en tanto no se alcance un acuerdo sobre ella, lo más adecuado, es avanzar rápidamente, tal como lo ha propuesto el Gobierno, en la tramitación legislativa de este proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Espina recordó que ya se había aprobado una reforma constitucional que obliga a adecuar la legislación electoral al mandato constitucional que establece la inscripción automática y el voto voluntario.

La Honorable Senadora señora Alvear manifestó que la ex Presidenta señora Michelle Bachelet presentó un proyecto de ley que contemplaba no sólo el tema de la inscripción automática y el voto voluntario, sino que también el derecho de sufragio de los chilenos que viven en el exterior. Agregó que la Sala del Senado ya aprobó en general esa iniciativa la cual está en discusión en particular en esta Comisión. Hizo presente que durante su análisis legislativo surgieron diversas dudas, lo que motivó que se abrieran nuevos plazos para presentar indicaciones.

Seguidamente, puso de relieve que el actual Gobierno ha decidido seguir un camino diferente, y ha presentado nuevos proyectos para regular separadamente las cuestiones electorales pendientes.

Concluyó indicando que esta Comisión tiene una gran responsabilidad y que debía cumplirla adecuadamente ya que toda la legitimidad de nuestras instituciones democráticas descansa en que los procesos electorales se realicen de manera participativa y de acuerdo con preceptos que den garantías a todos los sectores que concurren a los actos electorales.

El Honorable Senador señor Espina connotó que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento era la instancia donde debería construirse el acuerdo que permitiera avanzar en la

regulación de estas materias. Lo anterior, puntualizó, no impide que otras fuerzas parlamentarias que no están representadas en la Comisión puedan expresar su parecer sobre las iniciativas político-electorales que ha presentado el Gobierno.

Instó al Gobierno y a los integrantes de la Comisión a tener una conversación franca sobre los puntos en discrepancia, para tratar de alcanzar un acuerdo que, tal como ha ocurrido en el pasado, les permita superar los puntos de diferencia.

Manifestó, finalmente, que si no hay acuerdo, cada sector político asumirá la responsabilidad que le corresponde y el Ejecutivo podrá ejercer las facultades constitucionales que tiene para que exista un pronunciamiento en estas materias.

- - -

En una sesión posterior **la Comisión** tomó conocimiento de la opinión que el Senado solicitó a la Excm. Corte Suprema en relación con esta iniciativa. Como se consignara precedentemente, sin perjuicio de algunas observaciones puntuales sobre aspectos técnicos, ese Alto Tribunal acordó informar favorablemente este proyecto.

La Comisión tuvo presente, asimismo, los planteamientos formulados por los Ministros de la Corte Suprema que, además, integran el Tribunal Calificador de Elecciones.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, valoró estos planteamientos y llamó a la Comisión a tenerlos en consideración durante éste debate.

Los Honorables Senadores señores Chadwick y Larraín, don Hernán, sostuvieron que las referidas observaciones de los Ministros que integran el Tribunal Calificador de Elecciones constituyen una opinión que va más allá de lo que sus atribuciones legales les permiten. Explicaron que, en efecto, el Senado puso en conocimiento de ese Alto Tribunal el proyecto de ley sobre inscripciones automáticas y voto voluntario contenido en el Boletín N° 7.338-07, en conformidad con las disposiciones de los artículos 77 de la Carta Fundamental y 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. No obstante, agregaron, algunas de estas observaciones dicen relación con cuestiones de orden constitucional, que corresponde resolver soberanamente al Congreso Nacional.

A continuación, intervino **el señor Andrés Tagle, asesor del Ministro Secretario General de la Presidencia**, quien se hizo cargo de algunos de los planteamientos formulados por los Ministros del

Tribunal Calificador de Elecciones, contenidas en el recién mencionado oficio de la Excma. Corte Suprema.

En primer lugar, puntualizó que esta iniciativa no disminuye ni afecta las atribuciones calificadoras que corresponde ejercer al Tribunal Calificador de Elecciones.

Agregó que las reformas que se proponen materia de escrutinio se orientan a aumentar el grado de transparencia que debe rodear a todo acto electoral. Reconoció que, desde que preside este Órgano Electoral el Ministro señor Sergio Muñoz, desde esa instancia se han hecho importantes esfuerzos para lograr este mismo propósito. El proyecto de ley, en tanto, lo que hace es confirmar esta tendencia, estableciendo disposiciones que permiten al Servicio Electoral entregar digitalmente, a los Partidos Políticos y candidatos, información sobre resultados electorales. Aclaró que esta información se entregará, además, físicamente al Tribunal Calificador para facilitarle el desempeño de sus funciones. En consecuencia, dijo, no divisa razones que justifiquen alguna de las aprensiones expresadas.

Finalmente, resaltó que esta iniciativa es el resultado de un largo trabajo efectuado por una Comisión Técnica integrada por especialistas provenientes de diversas sensibilidades políticas y representa los consensos alcanzados en su seno.

Confirmando lo expresado por el señor Tagle, **el Ministro señor Larroulet** hizo presente que en la elaboración de esta iniciativa se había contado con el parecer de profesionales que se desempeñan en el Servicio Electoral, en el Servicio de Registro Civil e Identificación, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y cuyas opiniones fueron debidamente ponderadas y consideradas.

El Honorable Senador señor Quintana manifestó que las observaciones formuladas por los integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones eran muy serias y no podían ser obviadas por esta Comisión. Agregó que esta iniciativa cambia la naturaleza, organización y ámbito de atribuciones del Servicio Electoral, por lo que estimó indispensable escuchar a los órganos directivos del referido Servicio.

El Honorable Senador señor Espina recordó que el texto de la Carta Fundamental, reformada recientemente, exige legislar en esta materia. Añadió que durante la discusión del proyecto de ley que sobre estas mismas materias presentara la anterior Administración se efectuó un exhaustivo análisis, escuchando a numerosos expertos y, en especial, a los representantes del Servicio Electoral. En esa oportunidad, la Comisión analizó pormenorizadamente las diversas hipótesis que plantea cada aspecto del proceso electoral, razón por la que estima inconveniente dilatar la aprobación en general de esta nueva iniciativa, sin perjuicio de que durante su discusión en

particular se estudien en detalle cada una de las normas que han elaborado los equipos técnicos a los cuales se refirió el Ministro señor Larroulet.

El Honorable Senador señor Chadwick concordó con la opinión anterior, enfatizando que los antecedentes de esta iniciativa están suficientemente estudiados, por lo que no resulta razonable postergar su aprobación en general.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, compartió la solicitud planteada por el Honorable Senador señor Quintana.

El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, recordó que ya se había postergado la resolución sobre este asunto, por lo que ahora correspondía pronunciarse sobre esta iniciativa.

APROBACIÓN EN GENERAL

Finalizadas las intervenciones reseñadas precedentemente y analizados los demás antecedentes recibidos, **el Presidente Accidental de la Comisión, Honorable Senador señor Walker, don Patricio**, puso en votación en general esta iniciativa.

La Comisión resolvió darle su aprobación por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Chadwick, Espina, Larraín, don Hernán, Quintana y Walker, don Patricio.

Al fundar su voto, **el Honorable Senador señor Walker, don Patricio**, expresó que concurría con su voto favorable a aprobar esta iniciativa, toda vez que ella enfrenta el grave problema que significa la no incorporación de un número considerable de jóvenes a los registros electorales. Al respecto, recordó que de los tres millones de jóvenes chilenos que podrían participar en las elecciones, sólo setecientos mil están actualmente inscritos en los registros electorales. Agregó que, en ese sentido, era importante aprobar un proyecto que facilite la participación política juvenil.

Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que, de acuerdo con la información proveniente de diversos estudios electorales, la aprobación de esta iniciativa podría traer aparejado un descenso considerable de la participación de los sectores populares, por lo que planteó la conveniencia de que, durante la discusión en particular, se introduzcan algunos mecanismos que eviten ese fenómeno. Planteó, al efecto, la necesidad de que se incorporen fórmulas para fomentar la educación cívica en los jóvenes y en la población en general, y se consagren mecanismos tales como ofrecer compensaciones en la jornada laboral a quienes concurren a sufragar, como

ocurre en Colombia, y facilitar el traslado a los centros de votación a los habitantes de las zonas rurales o aisladas.

Concluyó instando al Gobierno para que durante la discusión en particular presente las indicaciones necesarias para materializar estas propuestas, ya que algunas de ellas corresponden a materias en las que él tiene iniciativa exclusiva.

- - -

En consecuencia, habida consideración del acuerdo precedentemente adoptado, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene a honra proponeros la aprobación, en general, del siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral:

1) Reemplázanse su Título Preliminar y los Títulos I, II y III por los siguientes:

“TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1º.- La presente ley regula el régimen de inscripción electoral y la organización y funcionamiento del Servicio Electoral, como parte del sistema electoral público a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Política de la República.

Artículo 2º.- El organismo encargado del proceso de inscripción electoral es el Servicio Electoral.

TITULO I DEL REGISTRO ELECTORAL

Párrafo 1º Disposiciones Generales

Artículo 3º.- Créase un Registro Electoral permanente bajo la dirección del Servicio Electoral, que contendrá la nómina de todos los chilenos comprendidos en los números 1 y 3 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años.

El Registro Electoral contendrá también la nómina de los demás chilenos y extranjeros mayores de 17 años, que cumplan con

los requisitos para sufragar establecidos en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la República.

El Registro Electoral contendrá a todos los electores potenciales a que se refieren los incisos anteriores, aún cuando se encontraren con su derecho a sufragio suspendido, o hubieren perdido la ciudadanía por cualquier causa.

El Registro Electoral servirá de base para conformar los Padrones Electorales que deberán usarse en cada plebiscito o elección, que contendrán exclusivamente los electores con derecho a sufragio en ella.

Artículo 4°.- El conocimiento público del Registro Electoral procederá en la forma dispuesta en el párrafo 1° del Título II.

Los centros de estudio o de investigación podrán solicitar datos del Registro Electoral, Padrón Electoral y Nómina Provisoria de Inhabilitados, para el solo efecto de su análisis. El Consejo del Servicio Electoral calificará la procedencia de la solicitud y entrega de los respectivos datos.

Los datos del Padrón Electoral no podrán ser usados para fines comerciales.

El Servicio Electoral deberá dar cumplimiento a lo previsto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, salvo en los casos señalados en esta ley.

Párrafo 2°
De la inscripción

Artículo 5°.- Los chilenos comprendidos en el número 1 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años serán inscritos automáticamente en el Registro Electoral.

Los chilenos comprendidos en el número 3 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, serán inscritos automáticamente luego de obtener su carta de nacionalización de conformidad a la ley.

Artículo 6°.- Los chilenos comprendidos en los números 2 y 4 del artículo 10 y los extranjeros señalados en el artículo 14, ambos de la Constitución Política de la República, serán inscritos en el Registro Electoral desde que se acredite que cumplen con los requisitos de edad y vecindamiento exigido por el inciso 3° del artículo 13 o por el artículo 14 de la Constitución Política de la República, según corresponda.

La inscripción procederá de forma automática en la medida que el Servicio Electoral tenga acceso a la información que acredite el requisito de avecindamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá presentar una solicitud de inscripción ante el Servicio Electoral en cualquiera de sus oficinas, acompañando los antecedentes que acrediten su avecindamiento en el país por el tiempo exigido, y declarando bajo juramento su domicilio electoral en Chile. Dicha solicitud será remitida al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes, si correspondiere, emitirán un certificado que acreditará el hecho de haber cumplido el avecindamiento y lo remitirán al Servicio Electoral para que practique la correspondiente inscripción. En caso que la persona tenga su residencia en el extranjero, dicha solicitud podrá ser presentada en el Consulado de Chile respectivo.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por Consulado a las Oficinas Consulares, incluyendo las Secciones Consulares de una Misión Diplomática, a cargo de un funcionario de la Planta del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores designado para desempeñar funciones consulares.

Artículo 7°.- El Servicio Electoral deberá comunicar a los nuevos electores el hecho de su inscripción en el Registro Electoral, entre los ciento ochenta y noventa días anteriores a la siguiente elección o plebiscito, indicando la circunscripción electoral y la mesa receptora de sufragios donde le corresponde votar, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

El Servicio Electoral deberá poner a disposición del público en forma permanente, a través de su sitio web y de una línea telefónica, un sistema de consulta donde cada elector podrá verificar mediante su número de cédula de identidad o nombre, el hecho de su inscripción, la circunscripción y comuna donde se encuentra inscrito, su mesa de votación y si está habilitado para votar en la próxima elección.

Párrafo 3°
De los datos electorales

Artículo 8°.- El Registro Electoral deberá contener los nombres y apellidos de los inscritos, e indicará para cada uno el número de rol único nacional, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, la profesión, el domicilio electoral, la circunscripción electoral que corresponde a dicho domicilio con identificación de la región, provincia y comuna a que pertenezca, el número de la mesa receptora de

sufragios en que le corresponde votar y el haber cumplido la condición de avecindamiento si corresponde.

El Registro Electoral también deberá contener los antecedentes necesarios para determinar si la persona inscrita ha perdido la ciudadanía, el derecho a sufragio o se encuentra éste suspendido.

Se entenderá por datos electorales los señalados en este artículo y cualquier otro que sea necesario para mantener actualizado el Registro Electoral.

Artículo 9°.- Para el solo efecto de obtener los datos señalados en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales de todas las personas registradas en el Servicio de Registro Civil e Identificación y al registro de extranjeros avecindados del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior. La Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, deberán proporcionar de la misma forma la información del avecindamiento de los chilenos comprendidos en los números 2° y 4° del artículo 10 de la Constitución Política de la República.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá proporcionar al Servicio Electoral cualquier otro antecedente que resulte necesario para la inscripción de los chilenos y extranjeros en el Registro Electoral y que se encuentre en su poder, quedándole expresamente prohibido calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 10.- El domicilio electoral es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él.

Se tendrá como domicilio electoral el último domicilio declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Para efectos del registro automático de las personas referidas en los artículos 4° y 5°, el domicilio electoral será el declarado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación al momento de obtener o renovar su cédula de identidad o ante el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, según corresponda.

En caso que la cédula de identidad se haya obtenido en algún Consulado en el extranjero, el domicilio electoral

corresponderá al último domicilio en Chile informado al Servicio de Registro Civil e Identificación y a falta de éste al lugar de nacimiento en Chile.

Si la persona no hubiere obtenido cédula de identidad al momento de procederse a su inscripción automática conforme al artículo 4°, el Servicio de Registro Civil e Identificación comunicará el domicilio registrado al momento de solicitar la inscripción de nacimiento, el cual será para estos efectos domicilio electoral. En caso de ser más de uno los domicilios registrados, se estará al domicilio de la madre.

Artículo 11.- Todo ciudadano con derecho a sufragio deberá estar inscrito en una mesa receptora de sufragios que pertenezca a la circunscripción electoral correspondiente a su domicilio electoral.

Artículo 12.- Al momento de la inscripción de un ciudadano o modificación de la existente, el Servicio Electoral asignará a las mesas receptoras de sufragios a los nuevos electores inscritos o aquellos que hayan modificado su domicilio electoral, en orden correlativo de su rol único nacional y sin distinción de sexo.

En primer lugar serán asignados a las mesas receptoras de sufragios existentes de la circunscripción, que tengan menos de trescientos cincuenta electores habilitados para votar, debido a cancelaciones de inscripción producidas por cambio de domicilio electoral, por causa de fallecimiento, o cualquier otra inhabilidad permanente para sufragar, hasta completar la cifra máxima de 350 electores por mesa.

Si realizado lo anterior, quedaren nuevos electores por asignar, ellos serán asignados a nuevas mesas receptoras de sufragios que se crearán para estos efectos, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores.

Cada elector solo podrá ser asignado a una mesa receptora de sufragios y no podrá ser cambiado de ella mientras mantenga su domicilio electoral vigente en dicha circunscripción electoral.

Párrafo 4°

De las actualizaciones del Registro Electoral

Artículo 13.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el Registro Electoral considerando las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

b) Pérdida de ciudadanía de una persona inscrita, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17° de la Constitución Política de la República, o su recuperación.

c) Suspensión del derecho a sufragio de una persona inscrita, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, o el cese de dicha suspensión.

d) Pérdida de la nacionalidad de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro.

e) Revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, quienes deberán ser eliminados del Registro.

f) Reclamaciones al Padrón Electoral Provisorio Auditado acogidas en conformidad a la ley.

El Servicio Electoral conservará los antecedentes en que se funde la actualización por un lapso no inferior a 5 años.

Artículo 14.- Para el solo efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales que el Servicio de Registro Civil e Identificación tenga de las personas cuyas defunciones hubieren sido registradas en el mes inmediatamente anterior; de las personas que hubieren sido condenadas a pena aflictiva y los que recuperen su ciudadanía; y de las personas que hubieren perdido la nacionalidad.

Artículo 15.- El Tribunal Constitucional deberá comunicar al Servicio Electoral las sanciones que hubiere aplicado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como asimismo el cumplimiento del plazo a que se refiere dicha disposición, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia hubiere quedado firme o ejecutoriada.

Artículo 16.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior informará al Servicio Electoral las revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, ejecutoriadas dentro del mes anterior.

Artículo 17.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas respecto de las cuales el Ministerio Público o un querellante particular hubiere presentado en el mes anterior, acusación por delitos que merezcan pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.

En la misma oportunidad, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, según corresponda, deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, aunque no sean condenados a pena aflictiva, o por delitos que la ley califique como conducta terrorista, o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos.

Artículo 18.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes, los jueces de letras comunicarán al Servicio Electoral los nombres de las personas que hubieren sido declaradas en interdicción por causa de demencia por sentencia ejecutoriada, en el mes anterior, indicando los antecedentes necesarios para su cabal identificación.

En el mismo plazo, los jueces de letras comunicarán sobre las revocaciones de dichas declaratorias.

Artículo 19.- Dentro de los primeros cinco días de cada mes, el Senado deberá comunicar al Servicio Electoral las personas a las cuales se hubiere rehabilitado su ciudadanía en el mes anterior, conforme al inciso final del artículo 17 de la Constitución Política de la República.

Artículo 20.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el Ministerio de Justicia deberá comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren extinguido su responsabilidad penal en el mes anterior, conforme a lo dispuesto en el número 4° del artículo 93 del Código Penal.

Artículo 21.- Los órganos, servicios y tribunales señalados en este párrafo, así como cualquier otra repartición que deba aportar datos para la conformación y actualización del Registro Electoral, deberán proporcionar todos los antecedentes que para este solo efecto requiera el Servicio Electoral, en ningún caso podrán excluir información, calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio.

Artículo 22.- Entre los ciento ochenta y noventa días anteriores a una elección o plebiscito, el Servicio Electoral deberá informar a los electores que su derecho a sufragio ha sido suspendido o que han sido inhabilitados para votar en la siguiente elección, con indicación de la causa que dio origen a dicha suspensión o inhabilidad, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.

Párrafo 5°

De las modificaciones de los datos electorales

Artículo 23.- El Servicio Electoral modificará los datos de las personas inscritas en el Registro Electoral, considerando las siguientes circunstancias:

a) Solicitudes de cambio de domicilio electoral y las actualizaciones de domicilio electoral realizadas al renovar los inscritos su cédula de identidad.

b) Las rectificaciones de inscripciones de nacimiento de los ciudadanos, con indicación de los datos originales que fueron objeto de la rectificación, y

c) Cualquier otro cambio en los datos señalados en el artículo 7° de esta ley.

Artículo 24.- Con ocasión de la obtención o renovación de cédula de identidad o pasaporte, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar a la persona su domicilio electoral registrado, otorgándole la posibilidad de actualizarlo, declarando uno nuevo bajo juramento en ese acto si así lo desea.

Artículo 25.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el cambio de domicilio podrá también efectuarse directamente ante el Servicio Electoral, mediante una solicitud escrita firmada por el peticionario en formularios especialmente diseñados por este organismo, donde declarará bajo juramento su nuevo domicilio electoral. Dichas solicitudes deberán ser presentadas en las oficinas que el Servicio Electoral disponga a lo largo del país. Los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero, podrán presentar la solicitud a través del respectivo Consulado.

El Servicio Electoral deberá notificar al elector mediante carta certificada dirigida al nuevo domicilio electoral, que ha procedido al cambio de su domicilio en el registro, indicando la circunscripción electoral y mesa de sufragio donde le corresponderá votar.

El Servicio Electoral podrá disponer de otras formas para efectuar el cambio de domicilio electoral, ya sea a distancia o a través de medios electrónicos, siempre que éstas garanticen la confiabilidad en la identidad del elector y la seguridad de sus datos.

Artículo 26.- El Servicio Electoral podrá convenir con otros organismos públicos la recepción de solicitudes de cambio de domicilio electoral.

Artículo 27.- Para todos los efectos legales, se considerará como domicilio electoral el último declarado por el elector ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Párrafo 6°

De la suspensión de inscripciones, actualizaciones y modificaciones

Artículo 28.- Con el objeto de elaborar los padrones electorales que se utilizarán en cada elección o plebiscito, las inscripciones en el Registro Electoral que provengan de solicitudes de acreditación de avecindamiento conforme al artículo 6, las actualizaciones de las circunstancias contenidas en las letras a) a la e) del artículo 13 y las modificaciones señaladas en el artículo 23, se suspenderán a los ciento veinte días anteriores a cada elección o plebiscito, reanudándose a partir del primer día del mes siguiente de la elección o plebiscito.

Artículo 29.- Tratándose de plebiscitos comunales, la suspensión a que alude el artículo precedente se aplicará solo respecto de los electores que correspondan a la comuna o agrupación de comunas donde se realizará.

TITULO II DEL PADRÓN ELECTORAL Y DE SU AUDITORIA

Párrafo 1°

Del Padrón Electoral

Artículo 30.- El Servicio Electoral deberá elaborar un Padrón Electoral, el que contendrá la nómina de los electores inscritos en el Registro Electoral que reúnen los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio conforme a los antecedentes conocidos por él.

Cada elector podrá figurar solo una vez en él.

Artículo 31.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de provisorio, ciento diez días antes de una elección o plebiscito. Éste contendrá una nómina de las personas inscritas en el Registro Electoral que, conforme a los antecedentes conocidos por el Servicio Electoral antes de los ciento veinte días previos al acto electoral, reúnan a la fecha de la elección o plebiscito correspondiente los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio.

El Padrón Electoral con carácter de provisorio será objeto de auditorías conforme al Párrafo 2° de este Título.

Este Padrón se ordenará en forma alfabética y contendrá los nombres y apellidos del elector, su número de rol único

nacional, sexo, domicilio electoral con indicación de la circunscripción electoral, comuna, provincia y región a la que pertenezcan y el número de mesa receptora de sufragio en que le corresponde votar.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Provisoria de Inhabilitados, que incluirá a las personas inscritas que se encuentren inhabilitadas de votar en la correspondiente elección o plebiscito, con indicación de la causal que dio lugar a dicha condición.

El Padrón Electoral y la Nómina Provisoria de Inhabilitados, son públicos para los partidos políticos, solo en lo que se refiere a los datos señalados en el inciso tercero. Los partidos políticos podrán tener acceso y copia de ellos en medios magnéticos o digitales, no encriptados y procesables por software de general aplicación, debiendo solo pagar los costos directos de la reproducción. Lo mismo se aplicará para los candidatos independientes, respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Solo las personas inhabilitadas podrán conocer, además, la respectiva causal que las inhabilita.

Artículo 32.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de auditado, setenta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de provisorio, después de ser auditado por las empresas de auditoría a las que se refiere el Título II de esta ley y que ha sido modificado solo como consecuencia de la correcciones sugeridas por las empresas de auditorías en sus informes si las hubiere y que conforme a lo señalado en el artículo 42 de esta ley, sean aceptadas por el Servicio Electoral.

El Padrón Electoral con carácter de auditado podrá ser objeto de reclamación de conformidad a lo establecido en la presente ley.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Auditada de Inhabilitados, modificando la anterior en base a las correcciones sugeridas por las empresas de auditorías que haya aceptado, si las hubiere.

El Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados, deberán ser publicados por el Servicio Electoral en su sitio web con setenta días de antelación a la fecha que deba verificarse una elección o plebiscito.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados, las disposiciones señaladas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo anterior.

Artículo 33.- El Servicio Electoral determinará un Padrón Electoral con carácter de definitivo, treinta días antes de una elección o plebiscito. Éste corresponderá al Padrón Electoral con carácter de auditado, que ha sido modificado solo como consecuencia de las reclamaciones acogidas, si las hubiere, de conformidad con lo dispuesto en el Título siguiente.

Junto con este Padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará una Nómina Definitiva de Inhabilitados, modificando la anterior en base a las reclamaciones acogidas.

El Servicio Electoral publicará en su sitio web, con al menos treinta días de anticipación a la fecha en que deba verificarse una elección o plebiscito, el Padrón Electoral con carácter de definitivo, que contiene la nómina de electores con derecho a sufragio en la respectiva elección o plebiscito y la Nómina Definitiva de electores Inhabilitados.

Serán aplicables al Padrón y la Nómina antes mencionados, las disposiciones señaladas en los incisos tercero, quinto y sexto del artículo 31.

Artículo 34.- El Servicio Electoral deberá publicar en su sitio web, las modificaciones efectuadas al Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados que provengan de las reclamaciones acogidas en conformidad a esta ley, o de las correcciones sugeridas por las empresas de auditoría que hayan sido aceptadas por el Servicio.

Artículo 35.- Para la segunda votación de la elección presidencial que se realice en virtud del inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, se utilizará el mismo Padrón Electoral con carácter de definitivo utilizado en la primera votación.

Artículo 36.- El Servicio Electoral, en la misma oportunidad en que debe determinar el Padrón Electoral con carácter de definitivo, deberá confeccionar los Padrones de Mesa que se utilizarán en la respectiva elección o plebiscito.

A cada Mesa Receptora de Sufragios le corresponderá un Padrón de Mesa.

Cada Padrón de Mesa contendrá una nómina, ordenada alfabéticamente, de las personas habilitadas para votar en la Mesa Receptora de Sufragios respectiva.

Los Padrones de Mesa contendrán los nombres y apellidos de cada elector y su número de rol único nacional.

Cada elector podrá figurar solo en un Padrón de Mesa y una vez en él.

Artículo 37.- Veinte días antes de la elección o plebiscito, el Servicio Electoral en forma gratuita pondrá a disposición de los partidos que participan en la elección o plebiscito, un listado impreso de cada Padrón de Mesa, que contendrá los nombres, apellidos y número de rol único nacional de los electores. Igual información deberá entregarse a los candidatos independientes respecto de las circunscripciones electorales donde participan.

Párrafo 2° De las Auditorias

Artículo 38.- El Registro Electoral, el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados serán sometidos a un proceso de auditoria con el objeto de revisar y determinar si contienen los antecedentes dispuestos por la ley. También se revisarán los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales utilizados en su elaboración.

Artículo 39.- Las auditorias serán practicadas por dos empresas independientes de auditoria externa, de niveles equivalentes, inscritas en el registro que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, las cuales deberán cumplir con los requisitos de capacidad, tamaño, confiabilidad y garantía que mediante una norma general emitirá el Consejo del Servicio Electoral.

El presupuesto del Servicio Electoral deberá contemplar los fondos necesarios para financiar los procesos de auditorías.

Artículo 40.- La selección de las empresas de auditoria, se realizará a través de una licitación pública a la cual deberá convocar el Servicio Electoral, conforme a las bases que elaborará su Consejo.

El Consejo del Servicio Electoral seleccionará a dos empresas de entre las cuatro que, cumpliendo con las bases de la licitación, hayan efectuado las menores ofertas económicas por sus servicios. En caso de haber menos de cuatro, la selección se circunscribirá a todos ellos.

Las dos empresas de auditoría serán seleccionadas por la unanimidad de los Consejeros del Servicio Electoral. A falta de unanimidad la selección se hará en una sola votación, teniendo cada Consejero derecho a votar solo por una de las candidatas. Quedarán seleccionadas las empresas que obtuvieren las dos más altas mayorías.

Las empresas serán seleccionadas por un período de ocho años. Dentro de ese período sus servicios podrán ser revocados solo por resolución del Tribunal Calificador de Elecciones, a petición fundada de la unanimidad del Consejo del Servicio Electoral, o por acuerdo del Senado.

Artículo 41.- Las empresas de auditoria deberán revisar anualmente y emitir un informe que contendrá su opinión, sobre los procedimientos, sistemas de información, mecanismos de control y programas computacionales del Servicio Electoral, destinados a la inscripción de los electores en el Registro Electoral y a la confección del Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados. Dicho informe deberá señalar la capacidad de ellos de poder cumplir las funciones para la cual están requeridos, sus errores, si los hubiere, y los factores de riesgo que pudieran afectar su correcto funcionamiento. El informe deberá contener también sugerencias respecto a la solución de los problemas detectados.

En los años que correspondan elecciones generales, el informe deberá ser emitido doscientos diez días antes de la elección.

Artículo 42.- Determinado el Padrón Electoral con carácter de provisorio y la Nómina Provisoria de Inhabilitados conforme al artículo 31 de esta ley, las empresas de auditoria procederán a su revisión, que tendrá por objeto entregar una opinión respecto de si ellos cumplen con lo dispuesto en la ley. Terminada la revisión, elaborarán un informe, que deberá ser emitido ochenta días antes de la elección o plebiscito, y contendrá, al menos, un detalle de los errores encontrados con indicación de una sugerencia respecto de cómo pueden ser subsanados, y los demás comentarios u observaciones que los auditores estimen procedentes.

Artículo 43.- El Consejo del Servicio Electoral analizará los informes de auditoría y realizará las correcciones que estime pertinentes. Lo anterior constará en un acta que será publicada en la página web de dicho organismo.

Cumplido lo anterior, el Consejo del Servicio determinará el Padrón Electoral con carácter de auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados, conforme al artículo 32.

Artículo 44.- Todos los informes de las empresas de auditoria serán públicos, salvo respecto de las causales de inhabilidad. El informe deberá ser entregado al Consejo del Servicio Electoral, al Senado, a la Cámara de Diputados, a los Partidos Políticos, a los Tribunales Electorales Regionales y al Tribunal Calificador de Elecciones, en la misma oportunidad.

Artículo 45.- Las empresas de auditoria deberán efectuar sus funciones con total independencia entre ellas. En consecuencia, no podrán compartir sus antecedentes, consultarse entre sí, tomar acuerdos, coordinar o efectuar trabajos en forma conjunta, ni externalizar parte de las funciones encargadas con los mismos terceros.

Artículo 46.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición de las empresas de auditoria todos sus registros, físicos y computacionales y demás antecedentes que en opinión de ellas sean necesarios para realizar sus informes. El Servicio de Registro Civil e Identificación y los demás organismos señalados en los artículos 15 al 20, deberán poner a disposición de las empresas de auditoria, la misma información que hubieren entregado al Servicio Electoral, cuando exista disconformidad entre los datos electorales y el Padrón Electoral.

Las empresas de auditoría deberán mantener reserva o secreto, según corresponda, de la información, datos y antecedentes que se les proporcione en virtud de este artículo, siendo público solamente los resultados de su auditoría.

TÍTULO III DE LAS RECLAMACIONES

Artículo 47.- La persona que estimare que injustificadamente fue omitida del Padrón Electoral con carácter de Auditado, publicado conforme al artículo 32, podrá reclamar de este hecho, por escrito o verbalmente, dentro de los diez días siguientes a la publicación, ante el Tribunal Electoral Regional de su domicilio electoral, que conocerá del asunto.

En el mismo plazo, los Partidos Políticos, candidato independiente y cualquier otra persona, podrán presentar reclamaciones ante el mismo Tribunal, respecto de electores injustificadamente omitidos de este Padrón Electoral. Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones, en única instancia.

El Tribunal resolverá con los antecedentes que el interesado le suministre, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser emitido dentro del plazo de cuatro días de requerido. El Tribunal deberá

fallar, con o sin informe, dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la presentación del reclamo.

El Tribunal ordenará la incorporación del reclamante o electores afectados al padrón electoral en los casos en que hubiere lugar a ella.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales, serán apelables por el requirente o por el Servicio Electoral dentro del plazo de tres días, contados desde la fecha de su incorporación en el Estado Diario del respectivo Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el cual deberá fallar dentro de un plazo de cinco días de presentada la apelación.

Ejecutoriada la sentencia, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, la comunicará inmediatamente al Servicio Electoral, el cual procederá a cumplirla sin más trámite.

Artículo 48.- Dentro de los diez días siguientes a la publicación del Padrón Electoral con carácter de Auditado, señalado en el artículo 31, cualquiera persona natural, partido político o candidato independiente podrá pedir al Tribunal Electoral Regional correspondiente al domicilio electoral del impugnado, la exclusión de quien figure en el Padrón Electoral en contravención a la ley.

Cuando estas reclamaciones involucren a más de un elector, serán conocidas por el Tribunal Calificador de Elecciones en única instancia.

No procederá solicitar la exclusión del padrón electoral respecto de un candidato cuya aceptación de candidatura se encuentre ejecutoriada.

La solicitud deberá ser acompañada de una boleta de depósito en arcas fiscales. El monto del depósito deberá ser igual o mayor a un cuarto de una unidad tributaria mensual, e igual o menor a cien unidades tributarias mensuales, según lo determine el Tribunal.

El Tribunal citará dentro de cinco días al reclamante y a la persona o personas cuya exclusión se pide, las que no estarán obligadas a asistir, pudiendo concurrir con todos sus medios de prueba. Para este efecto, el reclamante deberá notificar personalmente o por cédula a la persona o personas reclamadas en el domicilio señalado en el Padrón. Si la persona reclamada o alguna de ellas hubiesen cambiado de domicilio, se le notificará por medio de un aviso que se publicará a costa del recurrente en un diario de los de mayor circulación en la localidad a que corresponda dicho domicilio.

En caso de que la reclamación afectare a un considerable número de personas o que el número de reclamos fuera muy elevado, podrá el Tribunal ordenar que la citación se haga por medio de un aviso que se publicará, a costa del reclamante, en un diario de los de mayor circulación en la localidad que corresponda. Además, señalará diversas audiencias para oírlos, las cuales deberán celebrarse dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de ingreso del reclamo correspondiente.

La audiencia tendrá lugar con las partes que concurran. Si ninguna de ellas compareciere, el Tribunal resolverá con el mérito de los antecedentes que se presenten.

No se admitirán incidentes dilatorios en la tramitación de estos reclamos.

Los Tribunales resolverán con los antecedentes que el interesado o él o los afectados le suministren, previo informe del Servicio Electoral, el cual deberá ser evacuado a más tardar al cuarto día de ser solicitado.

La resolución judicial se expedirá dentro de los cinco días siguientes a la audiencia y se notificará a las partes por el Estado Diario.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales, serán apelables por el requirente, él o los afectados y el Servicio Electoral, dentro del plazo de tres días, contados desde la fecha de incorporación en el Estado Diario del Tribunal, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, quien deberá resolver la apelación dentro del plazo de cinco días.

Ejecutoriada la sentencia que ordena la exclusión, será notificada al Servicio Electoral para que efectúe la cancelación correspondiente.

Artículo 49.- Los informes de las empresas de auditoría tendrán ante los tribunales el valor de un informe de peritos.

TITULO IV DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES

Artículo 50.- Las Circunscripciones Electorales son la unidad territorial electoral básica, formada por todo o parte del territorio comunal. En cada circunscripción electoral se determinarán Mesas Receptoras de Sufragios las que deberán funcionar en el territorio jurisdiccional de la circunscripción.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá crear circunscripciones electorales cuando circunstancias tales como la cantidad de población, las dificultades de comunicación con la sede comunal, las distancias excesivas o la existencia de diversos centros poblados de importancia, lo hagan aconsejable.

La resolución determinará el territorio jurisdiccional de las nuevas circunscripciones y se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en un periódico de la localidad respectiva y, si allí no lo hubiere, en el correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias lo requieran.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá cancelar una circunscripción electoral cuando circunstancias tales como la cantidad de población o dificultades para sufragar lo hagan aconsejable. En este caso, deberá asignar a los electores a la circunscripción más cercana incorporándolos a una mesa receptora de sufragio de conformidad al artículo 12 y efectuando la comunicación señalada en el artículo 7° inciso primero, de esta ley.

TÍTULO V DE LAS SANCIONES Párrafo 1°

De los procedimientos judiciales por faltas y delitos contemplados en esta ley

Artículo 51.- Los delitos o faltas electorales se regirán por las disposiciones de la presente ley y, supletoriamente, por el Código Penal.

Cualquier persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la región, podrá deducir querella para la investigación de los delitos sancionados en esta ley.

Artículo 52.- No procederá el indulto particular en favor de los condenados en virtud de esta ley.

Párrafo 2° De las sanciones

Artículo 53.- Sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias mensuales:

1.- El que al momento de solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, suplantare a otra persona;

2.- El que proporcionare datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento;

3.- El que ocultare, sustrajere o destruyere una solicitud de cambio de domicilio, un Libro de Actas, o una solicitud de acreditación de avecindamiento o los antecedentes que la acompañan; y

4.- El que use para fines comerciales los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 54.- Sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos:

1.- El que maliciosamente altere la información contenida en el Registro Electoral, en el Padrón Electoral, en los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragio, en las Nóminas de Inhabilitados y en los antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación y cualquier otro antecedente que pueda ser usados para conformar el Registro Electoral y sus actualizaciones;

2.- El que maliciosamente modifique el domicilio electoral informado por los electores al recibir solicitudes de éstos o cuando lo informen al obtener o renovar su cedula de identidad;

3.- El que incite u organice a electores para proporcionar datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral; y

4.- El que comercialice los datos del Registro Electoral o Padrón Electoral.

Artículo 55.- Si los delitos señalados en el artículo precedente son cometidos por un funcionario público, se les aplicarán las penas asignadas a los referidos delitos, aumentadas en un grado, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.

Artículo 56.- El que por negligencia extraviare documentos, solicitudes de cambio de domicilio electoral, solicitudes de acreditación de avecindamiento o libros de actas que se le hubieren confiado o destruyera información computacional que contenga antecedentes del

Registro Electoral o del Padrón Electoral y de los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragios, sufrirá la pena de prisión en su grado máximo.

Si en la desaparición de estos efectos mediare dolo, los autores del hecho sufrirán la pena de presidio menor en su grado mínimo, multa de una a tres unidades tributarias mensuales e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.

2) Reemplázase la numeración del actual Título IV por la de Título VI y la de los artículos 87, 88 y 89 por 57, 58 y 59. Además reemplázase el actual artículo 90, que pasa a ser artículo 60:

“Artículo 60.- Corresponderá al Servicio Electoral ejercer las siguientes funciones:

a) Supervigilar y fiscalizar a las Juntas Electorales establecidas en la ley 18.700 y velar por el cumplimiento de las normas electorales, debiendo denunciar ante la autoridad que corresponda a las personas que las infringieren, sin perjuicio de la acción pública o popular que fuere procedente;

b) Formar, mantener y actualizar el Registro Electoral;

c) Determinar el Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados en los términos señalados en esta ley;

d) Ordenar y resolver directamente sobre el diseño e impresión de formularios y demás documentos que se utilicen en el proceso de formación y actualización del Registro Electoral;

e) Resolver respecto de las solicitudes de cambio de domicilio electoral y de acreditación de avecindamiento que se le presenten;

f) Solicitar la colaboración y antecedentes que sean necesarios, de los distintos órganos del Estado, para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia;

g) Disponer la compra de los programas y equipos computacionales que utilizará en el cumplimiento de sus funciones, y los sistemas de mantención, protección y actualización de éstos; y

h) Las demás que esta u otras leyes establezcan.”.

3) Agrégase un nuevo artículo final al párrafo 1° del actual Título IV que pasa a ser VI:

“Artículo 61.- Los órganos de dirección del Servicio Electoral serán el Consejo Directivo y su Director. Al Consejo corresponderá la dirección superior del Servicio y la dirección administrativa al Director.”.

4) Sustitúyese los Párrafo 2° y 3° del actual Título IV que pasa a ser VI por los siguientes:

“Párrafo 2°
Del Consejo Directivo del Servicio Electoral

Artículo 62.- El Consejo Directivo estará integrado por cinco consejeros, cuatro de los cuales serán designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. El Presidente hará la proposición en un solo acto y el Senado deberá pronunciarse sobre el conjunto de la propuesta.

Dentro de los treinta días siguientes al inicio de su mandato, el Presidente de la República designará al quinto consejero, quien será el Presidente del Consejo.

Los consejeros designados con acuerdo del Senado durarán ocho años en sus cargos y podrán ser reelegidos hasta por dos veces. Se renovarán por parcialidades, cada cuatro años.

El consejero designado directamente por el Presidente de la República, durará cuatro años en su cargo y podrá ser reelegido hasta por dos veces.

En caso que un consejero cesare en su cargo por cualquier causa, se procederá a la designación de un nuevo consejero, en un plazo de treinta días, en conformidad a lo dispuesto en este artículo, que durará hasta completar el periodo de quien reemplace.

Artículo 63.- Para ser designado Consejero del Servicio será necesario, además de cumplir con los requisitos generales para ocupar cargos públicos, poseer título profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de conformidad a la legislación vigente, acreditar experiencia profesional no inferior a cinco años en el sector público o privado y no haber desempeñado cargos de representación popular, de Ministro de Estado, de Subsecretario, de Intendente, de Gobernador o de dirigente de partido político en los cinco años anteriores a su designación.

Tampoco podrán ser Consejeros, las personas que se encuentren en alguno de los casos contemplados en el artículo 86 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, con la sola excepción del desempeño en cargos docentes de hasta media jornada.

Los Consejeros no podrán estar afiliados a partidos políticos mientras sirva en el cargo.

La función de Consejero no es delegable y se ejerce colectivamente, en sala legalmente constituida.

Artículo 64.- Los Consejeros tendrán derecho a ser informados plena y documentadamente y en cualquier tiempo, por el Director o quien haga sus veces, sobre todo lo relacionado con el funcionamiento del Servicio. Además, tendrán derecho a revisar el Registro Electoral y los padrones electorales, con la sola limitación de no afectar el funcionamiento del Servicio.

Los Consejeros percibirán una dieta equivalente a 30 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 120 unidades de fomento por mes calendario.

El Presidente del Consejo o quien le subroge, percibirá igual dieta, aumentada en un 50%.

Artículo 65.- Son causales de cesación en el cargo de Consejero, las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fue nombrado. Sin perjuicio de ello, éste será prorrogado hasta el nombramiento de su reemplazante;

b) Haber cumplido los 75 años de edad;

c) Renuncia, aceptada por el Presidente de la República;

d) Incapacidad síquica o física para el desempeño del cargo;

e) Alguna causal de inhabilidad sobreviniente. El Consejero que adquiriera una calidad que lo inhabilite para desempeñar el cargo, cesará automáticamente en él; y

f) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como Consejero. Serán faltas graves, entre otras, la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis sesiones del Consejo, ordinarias o extraordinarias, durante un semestre calendario.

La existencia de las causales establecidas en las letras d) y e), si hubiere discusión sobre la sobreveniencia de la inhabilidad, y f) precedentes, serán declaradas por el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo o del Ministro del Interior en el caso de la letra f), o de cualquier persona en el caso de la letra e). El requerimiento deberá hacerse por escrito, acompañándose todos los elementos de prueba que acrediten la existencia de la causal. Se dará traslado al afectado por el término fatal de diez días hábiles para que exponga lo que estime conveniente en su defensa.

Vencido este plazo, con o sin la respuesta del afectado, se decretará autos en relación y la causa, para su agregación a la tabla, vista y fallo, se regirá por las reglas aplicables al recurso de protección. Tratándose de la causal de la letra d), el Tribunal, como medida para mejor resolver, podrá decretar informe pericial.

Los Consejeros y el Director tendrán el carácter de ministro de fe en las actuaciones que las leyes le encomienden.

En las causas civiles que se intentaren en contra de un Consejero o del Director, conocerá en primera instancia un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y en segunda instancia la respectiva Corte.

Artículo 66.- El Consejo sesionará, a lo menos, con cuatro de sus miembros en ejercicio. Presidirá las sesiones el Presidente del Consejo y, a falta de éste, su Vicepresidente.

El Consejo podrá sesionar en forma ordinaria o extraordinaria.

Son sesiones ordinarias aquellas que determine el propio Consejo para días y horas determinadas, en ellas se tratarán todas las materias que el Presidente incluya en la tabla respectiva, la que deberá ser comunicada a los consejeros con no menos de 24 horas de anticipación a la fecha de la sesión.

Por cada mes el Consejo deberá sesionar en forma ordinaria no menos de una vez y no más de tres veces.

Son sesiones extraordinarias aquellas en que el Consejo es convocado especialmente para conocer de modo exclusivo las

materias que motivan la convocatoria. Estas sesiones serán convocadas por su Presidente, cuando exista algún asunto urgente que requiera del conocimiento del Consejo, o cuando así sea solicitado a éste, por requerimiento escrito de dos Consejeros. La citación a sesión extraordinaria deberá hacerse con una anticipación no inferior a 48 horas y contendrá expresamente las materias a tratar.

Los acuerdos requerirán del voto favorable de, a lo menos, cuatro Consejeros. Si el Consejo no lograra el anterior quórum, deberá dejar constancia pública de su desacuerdo y las razones fundadas de las partes, convocando el Presidente del Consejo a una nueva sesión que deberá realizarse no antes de cuatro días ni después de quince, siempre que este último plazo no altere el cumplimiento de un plazo legal, donde deberá resolverse el desacuerdo con el voto conforme de, a lo menos, tres de sus miembros.

En todo caso, se requerirá siempre del voto conforme de, al menos, cuatro Consejeros para tomar los acuerdos señalados en la letra i) del artículo 67.

El Servicio no podrá celebrar actos o contratos en los que uno o más Consejeros tengan interés por sí o como representantes de otra persona. Se presume que existe interés directo de un Consejero en toda negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o las sociedades o empresas en las cuales sea director o dueño directo, o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

De toda deliberación y acuerdo del Consejo se deberá dejar constancia en un libro de actas. El acta deberá ser firmada por todos los Consejeros que hubieren concurrido a la sesión.

Artículo 67.- Corresponderá al Consejo:

a) Designar, en su primera sesión y de entre sus miembros, al Consejero que se desempeñará como Vicepresidente del Consejo. Esta designación se hará en sesión especialmente convocada al efecto y en una sola votación donde cada Consejero tendrá derecho a un solo voto. Será electo Vicepresidente del Consejo, el que alcance la más alta mayoría. El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia o imposibilidad transitoria de éste para ejercer el cargo;

b) Designar a los miembros de las Juntas Electorales según propuesta del Director;

c) Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al Servicio y adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal funcionamiento;

d) Aprobar la propuesta del presupuesto del Servicio efectuada por el Director;

e) Supervisar los actos del Director y Subdirector;

f) Dar instrucciones generales sobre la aplicación de las normas electorales para su ejecución por los organismos establecidos en ellas;

g) Aprobar los Padrones Electorales y la Nomina de Electores Inhabilitados, a los que se refiere esta ley;

h) Aprobar las bases para llamar a la licitación de las empresas de auditoria, seleccionarlasy conocer de sus informes;

i) Designar y remover al Director y Subdirector del Servicio Electoral. La designación se hará a partir de una quina propuesta para el cargo por el Consejo de la Alta Dirección Pública, en conformidad a las normas del Título VI de la ley 19.882; y

j) Las demás que le señale la ley o sobre las que deban pronunciarse en virtud de sus funciones o atribuciones.

Párrafo 3°

Del Director del Servicio Electoral

Artículo 68.- El Director del Servicio Electoral, será el representante legal del servicio y el Jefe Superior de éste. Le corresponderán especialmente las siguientes funciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo;

b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Servicio de conformidad con las directrices que defina el Consejo Directivo;

c) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Servicio, previo acuerdo del Consejo Directivo;

d) Nombrar al personal del Servicio y poner término a sus servicios, de conformidad a las normas estatutarias;

e) Ejecutar los actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de los fines del Servicio;

f) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio;

g) Representar al Servicio Electoral tanto judicial como extrajudicialmente;

h) Llevar el Registro de Partidos Políticos, actualizado por regiones y ejercer las demás atribuciones y funciones que le encomienden la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos u otras leyes;

i) Celebrar con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, convenios especiales para la ejecución de estudios, investigaciones o programas, que tengan por objeto el mejor cumplimiento o la difusión de los fines del Servicio;

j) Convocar a propuestas públicas o privadas, aceptarlas o rechazarlas;

k) Dictar las resoluciones generales y particulares necesarias para el ejercicio de sus atribuciones;

l) Contratar personal para labores transitorias cuando por necesidades del Servicio así se requiera, conforme a las normas del Código del Trabajo o sobre la base de honorarios;

m) Ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo Directivo; y

n) Ejercer las demás funciones que le encomienda esta u otras leyes.

Artículo 69.- El Director y Subdirector tendrán derecho a asistir a las sesiones de Consejo con derecho a voz.

Artículo 70.- Al Director y al Subdirector les serán aplicables las inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los Consejeros.

Párrafo 4° Del personal del Servicio Electoral

Artículo 71.- Los funcionarios y demás personas que presten servicios en el Servicio Electoral, estarán obligados a mantener

reserva acerca de los antecedentes, informaciones o documentos que conozcan en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las publicaciones que deban efectuarse y de las informaciones que pueda proporcionar dicho Servicio en conformidad a la ley.

Ni el personal del Servicio, ni las personas que a cualquier título desempeñen alguna función en él, podrán militar en partidos políticos, ni participar en o adherir a reuniones, manifestaciones, asambleas, publicaciones o cualquier otro acto que revista un carácter político-partidista o de apoyo a candidatos a cargos de representación popular. Tampoco podrán participar de modo similar con ocasión de los actos plebiscitarios.

Toda contravención a este artículo se sancionará con las penas contenidas en los artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal y con las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse administrativamente por la misma falta. Asimismo, serán aplicables las normas de responsabilidad funcionaria y del Estado contempladas en la ley N° 19.880, en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado.”.

5) Sustitúyase el actual artículo 99, que pasa a ser 72, del Título V que pasa a ser VII, por el siguiente:

“Artículo 72.- Los Partidos Políticos, candidatos independientes y demás entidades o personas que de acuerdo a la ley tengan acceso a la información contenida en el Registro Electoral, Padrón Electoral y Nómina de Inhabilitados, deberán actuar responsablemente en su manejo, debiendo responder civil y penalmente, según corresponda, y en conformidad a lo que establezca la ley.”.

6) Agrégase un nuevo artículo 73:

“Artículo 73.- Todos los plazos a que se refiere esta ley serán de días corridos.”.

Artículo 2°.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios:

1) Agréguese al final del artículo 1° la siguiente oración, pasando el punto final a ser punto seguido:

“Además establece y regula las Juntas Electorales.”

2) Sustitúyase el artículo 3, por el siguiente:

“Artículo 3.- Las declaraciones de candidaturas deberán efectuarse por escrito, para cada acto eleccionario, ante el Director del Servicio Electoral o el respectivo Director Regional del mismo Servicio, si lo hubiere, quien les pondrá cargo y otorgará recibo.

Las declaraciones deberán efectuarse por el Presidente y el Secretario de la Directiva Central de cada partido político o de los partidos que hubieren acordado un pacto electoral o por a lo menos cinco de los ciudadanos que patrocinen una candidatura independiente, acompañando la nómina a que se refiere el artículo 11. En todo caso, será acompañada por una declaración jurada del candidato, o de un mandatario designado especialmente al efecto por escritura pública, en la cual señalará cumplir los requisitos constitucionales y legales para ser candidato y no estar afecto a las inhabilidades. La declaración jurada podrá incluir el nombramiento del Administrador Electoral conforme al artículo 30 de la ley 19.884 y deberá ser acompañada sólo por los antecedentes que acrediten los estudios del candidato cuando corresponda en los términos que disponga el Servicio Electoral. Esta declaración jurada será hecha ante notario público o ante el oficial del Registro Civil correspondiente a la comuna donde resida el candidato.

La declaración de candidatura podrá presentarse en un acto separado por cada candidato.

Ningún candidato podrá figurar en más de una declaración en elecciones que se celebren simultáneamente.”.

3) Sustitúyase el inciso cuarto del artículo 3 bis, por el siguiente:

“El pacto electoral deberá formalizarse ante el Director del Servicio Electoral, antes del vencimiento del plazo y en forma previa a las declaraciones de candidaturas, mediante la presentación de una declaración suscrita por los Presidentes y Secretarios de los partidos políticos integrantes del pacto, que deberá indicar la decisión de concurrir en lista conjunta en una elección de Parlamentarios y que existe afinidad entre sus declaraciones de principios.”.

4) Sustitúyase el inciso segundo del artículo 6, por el siguiente:

“Tratándose de las declaraciones de candidaturas a Presidente de la República, éstas solo podrán hacerse hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a aquél en que deba realizarse la primera o única votación.”

5) Sustitúyase los incisos primero y segundo del artículo 11, por los siguientes:

“El patrocinio de candidaturas independientes deberá suscribirse ante cualquier notario por ciudadanos con derecho a sufragio que declaren bajo juramento o promesa no estar afiliados a un partido político legalmente constituido o en formación, y cuyos domicilios electorales registrados en el Registro Electoral corresponda al distrito o circunscripción senatorial, según se trate de elecciones de Diputados o Senadores. Será notario competente cualquiera del respectivo territorio.

La nómina de patrocinantes deberá señalar en su encabezamiento el nombre del candidato y el acto electoral de que se trate. A continuación, deberá dejarse expresa constancia del juramento a que se refiere el inciso anterior y de los siguientes antecedentes: primera columna, numeración correlativa de todos los ciudadanos que la suscriban; segunda columna, sus apellidos y nombres completos; tercera columna, número de la cédula nacional de identidad; cuarta columna, indicación de su domicilio electoral, con mención de la comuna; quinta columna, firma del elector o su impresión dactiloscópica, si no pudiere firmar, la que se estampará en línea enfrentando los datos de su filiación personal.”.

6) Reemplázase en el artículo 13, la expresión “inscritos en cualquier parte del territorio nacional” por “habilitados para ejercer el derecho a sufragio”.

7) Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente:

“Artículo 17.- El Consejo del Servicio Electoral, dentro de los diez días siguientes a aquel en que venza el plazo para declaración de candidaturas, deberá aceptarlas o rechazarlas. Para tal efecto dictará las resoluciones respectivas que se publicarán dentro de tercer día en el Diario Oficial.

El Consejo del Servicio Electoral deberá rechazar las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 25, 48 y 50 de la Constitución Política de la República, o que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 57 de la Constitución. Asimismo, rechazará las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los Párrafos 1° a 3° de este Título.”.

8) Agréguese en el artículo 19 el siguiente inciso segundo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente:

“Si el rechazo de la candidatura por parte del Servicio Electoral conforme al artículo 17, se hubiere fundado en no ser el candidato declarado ciudadano con derecho a sufragio, y el fallo del Tribunal hubiere ordenado su inscripción como candidato, el Servicio Electoral deberá también incorporar al candidato dentro del padrón de electores. Si, por el contrario, el Tribunal rechazare una candidatura aceptada por el Servicio Electoral, al considerar que el candidato no es ciudadano con derecho a sufragio, el Servicio Electoral deberá excluir al candidato del padrón de electores”.

9) Deróguese el artículo 21.

10) Reemplácese en el inciso primero del artículo 27, la expresión “Director del” por el vocablo “El”.

11) Elimínese en el artículo 29 el inciso tercero y sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“El Servicio Electoral entregará a los partidos políticos, a los pactos electorales y a los candidatos independientes, el número de facsímiles de las cédulas con las cuales se sufragará que determine el Servicio. La entrega se hará dentro del plazo señalado en el inciso anterior.”.

12) Deróguese el Artículo 34.

13) Reemplázase el artículo 37, por el siguiente:

“Artículo 37.- El Servicio Electoral podrá fusionar aquellas mesas receptoras de sufragios que tengan menos de ciento setenta y cinco electores habilitados para votar al momento de determinarse el padrón electoral, con una o más mesas receptoras de sufragio de la misma circunscripción electoral, con el objeto de que funcionen conjuntamente como si fueran una sola mesa, siempre que el resultado de dicha fusión no signifique que la mesa resultante supere el número de trescientos cincuenta electores habilitados para votar.

En este caso existirá un solo padrón de la mesa fusionada y se ordenará alfabéticamente.

La nueva mesa se identificará con los números de las mesas que se funcionaron separados por guiones.”

14) Sustitúyase el artículo 38, por el siguiente:

“Artículo 38.- Cada Mesa Receptora se compondrá de cinco vocales elegidos de entre los inscritos en el Padrón de Mesa respectivo.”

15) Intercálase en el inciso primero del artículo 40, entre las expresiones “representación popular;” y “los Ministros de Estado”, la expresión “las personas a cargo de los trabajos electorales que señala el artículo 7 de esta ley;”.

16) Reemplácese en el inciso primero del artículo 40 la expresión “los jueces letrados y los de Policía Local” por la expresión “los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local;”.

17) Reemplácese el inciso segundo del artículo 40 por el siguiente:

“Si por las causales anteriores no fuere posible integrar la Mesa, se constituirá con ciudadanos que figuren en los Padrones de Mesas correspondientes a mesas contiguas.”.

18) Sustitúyase el artículo 41, por el siguiente:

“Artículo 41.- Se designarán tres vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios con ocasión de la elección de diputados y senadores, y dos con ocasión de la elección de alcaldes y concejales. Podrá designarse un número superior, si se trata de una mesa nueva, o si alguno de los designados para elecciones anteriores que deba continuar ejerciendo esta función se hubiera cambiado de Circunscripción Electoral o hubiera perdido el derecho a sufragio.

Para proceder a la designación de vocales, el trigésimo día anterior a la elección, cada uno de los Miembros de la Junta Electoral escogerá diez nombres, que deberán corresponder a diez ciudadanos con derecho a sufragio en el respectivo padrón de mesa. Si la Junta funcionare con dos miembros cada uno elegirá quince nombres.

Al efectuar esta selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que puedan presumirse más aptas para desempeñar las funciones de vocales de Mesas y a los que no hubieran ejercido igual función durante los cuatro años anteriores.

Escogidos los nombres, la Junta Electoral procederá a confeccionar para cada Mesa Receptora una nómina en la que se asignará a cada uno de los nombres propuestos, ordenados alfabéticamente, un número correlativo del uno al treinta.

En sesión pública que se realizará en la oficina del Secretario, a las catorce horas del trigésimo día anterior a la fecha de la elección o plebiscito, las Juntas Electorales efectuarán un sorteo de manera que los primeros números, según corresponda, sirvan para individualizar en cada nómina a las personas que se desempeñarán como vocales de las Mesas Receptoras, y los siguientes, en orden correlativo, a quienes deberán actuar como reemplazantes.”.

19) Elimínese en el inciso primero del artículo 42 la expresión “comenzando por las de varones,”.

20) Reemplázase el inciso primero del artículo 43, por el siguiente:

“Artículo 43.- El Secretario de la Junta Electoral publicará la nómina completa de los vocales designados para cada Mesa Receptora de la respectiva elección. Respecto de todos ellos se indicarán solo los apellidos y sus dos primeros nombres, en un diario o periódico el vigésimo segundo día anterior a la elección o plebiscito, o, si ese día no circulare el periódico en que deba publicarse, en la primera ocasión posterior a esa fecha en que esto ocurra, y fijará en su oficina una copia autorizada de ella a la vista del público.”

21) Sustitúyase el artículo 47, por el siguiente:

“Artículo 47.- Los vocales sorteados por las Juntas Electorales para las Mesas Receptoras ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron sorteados. Con todo, los vocales sorteados por las Juntas Electorales que les corresponda actuar en la elección de Presidente de la República se entenderán convocados, por el solo ministerio de la ley, para cumplir iguales funciones en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, y en estos casos no se requerirá de la publicación y comunicación de que trata el artículo 43 de la presente ley.”.

22) Incorporase el siguiente artículo 47 bis, nuevo:

“Artículo 47 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de vocal de Mesa Receptora de Sufragio un bono equivalente a la suma de dos tercios de Unidad de Fomento, por cada acto electoral en el que participen.

Dicho bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Este bono se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, los delegados de las Juntas Electorales que correspondan, deberán remitir a la Tesorería General de la República, en la forma y en los plazos establecidos en el artículo 77 de esta ley, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la función de vocales en el acto electoral respectivo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

23) Modifíquese el artículo 49 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase en el inciso primero la expresión “a las catorce horas del último día sábado que preceda al tercer día anterior” por “a las quince horas del día sábado”.

b) Agréguese el siguiente inciso tercero:

“En esta misma ocasión, el Servicio Electoral dispondrá la capacitación de los vocales respecto de las funciones y atribuciones que deberán ejercer el día de la elección fomentando, especialmente, la aplicación de criterios objetivos y homogéneos en ellas. La asistencia a dicha capacitación será voluntaria.”

24) Reemplázase el inciso segundo del artículo 52 por el siguiente:

“El Secretario de la Junta Electoral requerirá de la Comandancia de Guarnición respectiva, a lo menos con sesenta días de anticipación a la audiencia, un informe sobre los locales estatales o privados que sean más adecuados para el expedito funcionamiento de las Mesas, la instalación de cámaras secretas y la mantención del orden público. Sin perjuicio de su informe escrito, el jefe aludido podrá, personalmente o representado por quien él designe, asistir a la audiencia de la Junta y proponer otros locales. La asignación de las Mesas que corresponderán a cada local se hará tratando de mantener, en la medida que ello sea posible, la misma asignación de las elecciones anteriores.”.

25) Sustitúyase el artículo 54, por el siguiente:

“Artículo 54.- A partir de las catorce horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito, en cada recinto de votación

iniciará sus funciones una Oficina Electoral dependiente de la respectiva Junta Electoral, que estará a cargo de un Delegado que designará dicha Junta. Esta nominación, que se entenderá subsistente para el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, deberá recaer preferentemente en un Notario Público, Secretario de Juzgado de Letras o Secretario Abogado de Policía Local, Receptor Judicial, Auxiliar de la Administración de Justicia u otro ministro de fe. En ningún caso podrá recaer en funcionarios Municipales o dependientes directa o indirectamente de Corporaciones Municipales. Estos delegados podrán hacerse asesorar por el personal necesario para el funcionamiento de la oficina, con cargo al Servicio Electoral y de acuerdo con las instrucciones que el Servicio imparta. Este personal percibirá un bono diario equivalente a media Unidad de Fomento.

El delegado tendrá derecho a un bono total equivalente a cinco Unidades de Fomento por todas las tareas realizadas con ocasión de las elecciones y plebiscitos que se realicen en un mismo acto electoral. Se considerará para estos efectos como otro acto electoral, la segunda votación realizada, conforme al inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política.

A estos bonos le será aplicable lo señalado en el inciso segundo del artículo 47 bis.

Las Oficinas Electorales funcionarán no menos de cuatro horas durante el segundo día anterior a la elección o plebiscito; desde las nueve horas y hasta al menos las dieciocho horas el día anterior a la elección o plebiscito; y desde las siete horas y hasta completar todas sus funciones en el día de la elección o plebiscito.

Corresponderá al delegado de la Junta Electoral, sin perjuicio de las demás tareas que señala esta ley:

1) Informar a los electores sobre la mesa en que deberán emitir el sufragio. Para estos efectos deberá contar con medios expeditos para la atención de las consultas de los electores de toda la Circunscripción Electoral, especialmente en lo que tenga relación, con su local de votación y su Mesa Receptora de Sufragios o poder señalar al elector su condición de estar inhabilitado para votar en la elección mencionando la causal;

2) Velar por la debida constitución de las Mesas Receptoras y, cuando corresponda, designar a los reemplazantes de los vocales que no hubieren concurrido conforme al artículo 57;

3) Hacer entrega a los Comisarios de Mesa de los útiles electorales;

4) Instruir a los electores no videntes sobre el uso de la plantilla a que se refiere el artículo 28;

5) Recibir, terminada la votación, los útiles electorales empleados en las mesas y los sobres con las actas de escrutinio que debe entregar al día siguiente al Colegio Escrutador;

6) Requerir el auxilio de la fuerza encargada del orden público.”.

26) Reemplázase el artículo 55, por el siguiente:

“Artículo 55.- El Servicio Electoral pondrá a disposición de la Oficinas Electorales, por intermedio de las Juntas Electorales, los útiles destinados a cada una de las Mesas Receptoras de Sufragios del respectivo local a lo menos el día anterior a la elección o plebiscito.

Para cada Mesa Receptora deberá considerarse el siguiente material:

1) El Padrón de Mesa con la nomina alfabética de los electores habilitados para votar en ella y los datos para identificarlos. Este padrón deberá disponer en la línea de cada elector de un espacio donde se estamparán las firmas o huellas dactiloscópicas de los electores que voten. Este espacio deberá ser de por lo menos tres centímetros de arriba a abajo por cada elector. Además deberá disponer de un espacio para anotar los números de las cédulas electorales. El Padrón de Mesa podrá estar dividido en dos secciones si así lo dispone el Servicio Electoral.

2) Dos ejemplares de la cartilla de instrucciones para uso de la Mesa Receptora de Sufragios, que elaborará el Servicio Electoral;

3) Las cédulas para la emisión de los sufragios en número igual al de los electores que deben sufragar, más un diez por ciento;

4) Cuatro lápices de grafito de color negro y dos lápices pasta de color azul;

5) Un tampón para huella dactilar.

6) Un formulario de acta de instalación;

7) Tres formularios de actas de escrutinio por cada elección o plebiscito y un cuarto de reemplazo en caso de que inutilicen alguno de los anteriores;

8) Un sobre para cada acta de escrutinio que deberá remitirse al Colegio Escrutador;

9) Un sobre para cada acta de escrutinio que deberá remitirse al Tribunal Calificador de Elecciones;

10) Cinco sobres por cada elección o plebiscito que se realice, para colocar las cédulas con que se sufrague. Uno de ellos llevará en su parte exterior la indicación “Votos escrutados no objetados”; otro, “Votos escrutados marcados y objetados”; otro, “Votos nulos y en blanco”; otro, “Talones de las cédulas emitidas”; y el quinto, “Cédulas no usadas o inutilizadas y talones y sellos adhesivos no usados”;

11) El sobre para colocar el Padrón de la Mesa;

12) El o los sobres para guardar el resto de los útiles usados;

13) Formularios de recibos de los útiles electorales y de las actas, que deban entregarse al Delegado de la Junta;

14) Un formulario de minuta del resultado del escrutinio por cada elección o plebiscito;

15) Un ejemplar de esta ley; y

16) Sellos adhesivos.

En los padrones, formularios y sobres se deberá indicar la región y circunscripción, el número de Mesa correspondiente y el sello del Servicio Electoral. Los sobres llevarán, además, la indicación del objeto a que están destinados o de su destinatario.

En la misma oportunidad, el Servicio Electoral remitirá, para uso de los Delegados de las Juntas Electorales, dos ejemplares del Padrón Electoral y de la Nomina de Electores Inhabilitados de toda la Circunscripción Electoral correspondiente y los formularios de recibo de los útiles electorales por parte de los Comisarios.”.

27) Sustituyese el artículo 57, por el siguiente:

“Artículo 57.- A las ocho horas de la mañana del día fijado para la elección o plebiscito se reunirán, en los locales designados para su funcionamiento, los vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios. Las Mesas no podrán funcionar con menos de tres vocales.

Los vocales asistentes que no se encontraren en número suficiente para el funcionamiento de las respectiva Mesa darán aviso inmediato al delegado de la Junta Electoral.

A partir de las nueve horas el delegado procederá a designar los vocales que faltaren hasta completar solo el mínimo necesario para funcionar, de entre los electores alfabetos no discapacitados que deban sufragar en el recinto. Deberá preferir a los electores que voluntariamente se ofrezcan en el orden en que se presenten. A falta de éstos, deberá designar a otros que se encuentren en el recinto, recurriendo al auxilio de la fuerza encargada del orden público si fuera necesario. El delegado deberá haber constituido todas las mesas a más tardar a las diez horas.

Integrada la mesa, los vocales originalmente designados podrán incorporarse a ella, en orden de presentación hasta completar el máximo de cinco, sin que puedan reemplazar a los vocales designados en virtud del inciso anterior y siempre que ello ocurra con anterioridad a las once horas. Del hecho de las incorporaciones y de su hora se dejará constancia en el acta de instalación.

En ningún caso las Mesas podrán integrarse pasadas las doce horas.”

28) Modifíquese el artículo 58 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase en el inciso segundo, la expresión “el o los Registros” por “el Padrón de Mesa”.

b) Elimínese los incisos tercero y cuarto.

29) Intercálese en el inciso segundo del artículo 59, después de la expresión “Cumplidos los trámites anteriores,” la frase “y nunca antes de las ocho de la mañana,”.

30) Sustitúyase el artículo 60, por el siguiente:

“Artículo 60.- Son electores, para los efectos de esta ley, los ciudadanos con derecho a sufragio y extranjeros que figuren en los Padrones de Mesa y que tengan cumplidos dieciocho años de edad el día de la votación.

El elector que concurra a votar deberá hacerlo para todas las elecciones o plebiscitos que se realicen en el mismo acto electoral.”

31) Agréguese al final del inciso cuarto del artículo 61, la siguiente frase:

“En ningún caso una misma persona podrá asistir a más de un elector en la misma Mesa Receptora de Sufragios, salvo que se trate de ascendientes o descendientes.”.

32) Sustitúyase el artículo 62, por el siguiente:

“Artículo 62.- El elector chileno entregará al Presidente su cédula nacional de identidad o pasaporte. El elector extranjero su cédula de identidad para extranjeros. Dichos documentos deberán estar vigentes. Ningún certificado u otros documentos podrán reemplazar a los anteriores.

Una vez comprobada la identidad del elector, la vigencia de su cédula de identidad o de su pasaporte, y el hecho de estar habilitado para sufragar en la Mesa, el elector firmará en la línea que le corresponda en el Padrón Electoral de la Mesa o, si no pudiere hacerlo, estampará su huella dactilar del dedo pulgar derecho o, en su defecto cualquier otro dedo, de lo que el presidente dejará constancia al lado de la huella. De la falta de este requisito, se dejará constancia en el Acta, aceptándose que el elector sufrague.”.

33) Reemplázase el inciso primero del artículo 63, por el siguiente:

“Si a juicio de la Mesa existiere disconformidad notoria y manifiesta entre las indicaciones del Padrón de Mesa y la identidad del elector, se recabará la intervención del experto de identificación que habrá en cada local de votación. El experto hará que el elector estampe su huella dactilar derecha al lado de su firma y la cotejará con la estampada en su cédula nacional de identidad o cédula de identidad para extranjeros.”.

34) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 64, la expresión “respectivo cuaderno de firmas” por “Padrón de la Mesa” y la expresión “votación” por “elección”.

35) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

“Artículo 66.- Después de haber sufragado y depositadas las cédulas en la urna, se procederá a devolver al elector su cédula nacional de identidad, el pasaporte o su cédula de identidad para extranjeros, según corresponda.”.

36) Sustitúyase en el inciso final del artículo 67, la expresión “numérico de las inscripciones” por “alfabético en el Padrón de Mesa”.

37) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

“Artículo 68.- A las dieciocho horas del día de la elección, y siempre que no hubiere algún elector que deseara sufragar, el Presidente declarará cerrada la votación, dejando constancia de la hora en el acta. Si hubiere electores con intención de sufragar, la Mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre de la votación.

Efectuada la declaración de cierre, el Secretario o el vocal en su caso, escribirá en el Padrón de la Mesa, en el espacio destinado para la firma, la expresión “no votó” respecto de los electores que no hayan sufragado.”

38) Modifícase el artículo 71, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyase el numeral 1), por el siguiente:

“1) El Presidente contará el número de electores que hayan sufragado según el Padrón de la Mesa y el número de talones correspondientes a las cédulas emitidas para cada elección o para el plebiscito;”.

b) Reemplázase el numeral 5), por el siguiente:

“5) Serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia, contengan o no en forma adicional, leyendas, otras marcas o señas gráficas. La Mesa dejará constancia al dorso de ella del hecho de su anulación y de la circunstancia de haberse reclamado por vocales o apoderados de esta decisión.

Se considerarán como marcadas y podrán ser objetadas por vocales y apoderados, las cédulas en que se ha marcado claramente una preferencia, aunque no necesariamente en la forma correcta señalada en el artículo 65, y las que tengan además de la preferencia, leyendas, otras marcas o señas gráficas que se hayan producido en forma accidental o voluntaria, como también aquella emitida con una preferencia pero sin los dobleces correctos. Estas cédulas deberán escrutarse a favor del candidato que indique la preferencia, pero deberá quedar constancia de sus marcas o accidentes en las actas respectivas con indicación de la preferencia que contienen.

Se escrutarán como votos en blanco las cédulas que aparecieren sin la señal que indique una preferencia por candidato u opción del elector, contengan o no en forma adicional, leyendas, otras marcas o señas gráficas;”.

c) Reemplázase el numeral 6), por el siguiente:

“6) Tratándose de una elección de Presidente de la República y de Parlamentarios, se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada uno de los candidatos.

En los plebiscitos se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada una de las cuestiones sometidas a decisión.

Las operaciones se practicarán por el Presidente, por el Secretario y demás vocales;”.

d) Reemplázase el numeral 7), por el siguiente:

“7) Terminado el escrutinio se llenará la minuta con los resultados, y será firmadas por los vocales colocándose en un lugar visible de la mesa.”.

e) Reemplázase el numeral 8), por el siguiente:

“8) Los vocales, apoderados y candidatos tendrán derecho a exigir que se les certifique, por el Presidente y el Secretario, copia del resultado, lo que se hará una vez terminada las actas de escrutinio.”

39) Sustitúyase el artículo 72, por el siguiente:

“Artículo 72.- Inmediatamente después de practicado cada escrutinio, y en el mismo lugar en que hubiere funcionado la Mesa Receptora se levantarán actas del escrutinio, estampándose separadamente, en letras y en cifras, el número de sufragios que hubiere obtenido cada candidato o cada una de las proposiciones de la cédula para plebiscito, en su caso.

Se dejará constancia de la hora inicial y final del escrutinio y de cualquier incidente o reclamación concerniente a la votación o escrutinio que deseen hacer constar los vocales y apoderados, sin que pueda eludirse por ningún motivo la anotación, bajo las penas que esta ley señala. Se dejará especial testimonio en el acta del cumplimiento de las exigencias del artículo 71.

El acta de escrutinio se escribirá en tres ejemplares idénticos, los que tendrán para todos los efectos legales el

carácter de copias fidedignas, serán firmadas por todos los vocales y los apoderados que lo deseen.

El primer ejemplar del acta quedará en poder del Secretario de la Mesa en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales, por el lado del cierre, para su remisión al Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, y dejándose testimonio, en letras, en la cubierta del sobre, de la hora en que el Secretario lo hubiere recibido.

El segundo ejemplar del acta se entregará por el Presidente de la Mesa al Delegado de la Junta Electoral, en sobre dirigido al Colegio Escrutador, cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre, para que éste lo presente al Colegio en la oportunidad señalada en el artículo 86. El Delegado entregará recibo de su recepción.

El tercer ejemplar del acta, inmediatamente después de llenada, y antes de practicar el escrutinio de otra elección, se entregará por el Comisario de la Mesa a la persona dispuesta por el Servicio Electoral de la Oficina Electoral del local a que se refiere el artículo 76 bis, en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre. Se entregará recibo de su recepción.

Si en el local de votación se contare con facilidades de fotocopia, se procederá a llenar un solo ejemplar del acta y, antes de su firma por los vocales, el Comisario de la Mesa concurrirá al lugar de fotocopia, obteniendo las otras dos copias y las copias necesarias para entregar a todos los apoderados que la hubieran solicitado. Después regresará a la mesa, donde se procederá a firmar el original y las copias por los vocales y apoderados que lo deseen con tinta o lápiz a pasta de color azul, cerciorándose de que sean idénticas al original. Posteriormente, se procederá a su ensobrado y distribución conforme a los incisos anteriores, debiendo destinarse el original al sobre que el Secretario de la Mesa remitirá al Tribunal Calificador de Elecciones.

40) Reemplázase el artículo 73, por el siguiente:

“Artículo 73.- Después de practicado cada escrutinio y llenado de las actas conforme al artículo anterior, el Presidente pondrá las cédulas escrutadas con las que se hubiere sufragado en la elección o el plebiscito, separando las cédulas escrutadas y no objetadas, las escrutadas marcadas y objetadas, los votos nulos y en blanco, las cédulas no usadas o inutilizadas, los talones desprendidos de las cédulas emitidas y los talones y sellos adhesivos no utilizados, dentro de los sobres especiales destinados a cada efecto.

En el sobre caratulado "Votos escrutados no objetados" se colocarán aquellas cédulas que, emitidas correctamente

conforme al artículo 65, no se encuentran en las situaciones señaladas en el número 5 del artículo 71.

En el sobre caratulado "Votos nulos y en blanco" se colocarán aquellas cédulas que, a juicio de la mayoría de la Mesa, se encuentren en cualquiera de los casos señalados en los párrafos primero y tercero del número 5 del artículo 71.

En el sobre caratulado "Votos escrutados marcados y objetados" se colocarán aquellas cédulas consideradas marcadas conforme al párrafo segundo del número 5 del artículo 71, contra las cuales se hayan formulado objeciones, que consten en el acta respectiva.

Se pondrán, además, dentro del respectivo sobre el Padrón de Mesa empleado en la votación de la Mesa.

Los sobres se cerrarán, sellarán y firmarán, por el lado del cierre, por todos los vocales y por los apoderados que quisieren.”.

41) Sustitúyase el artículo 75, por el siguiente:

“Artículo 75.- Completados todos los escrutinios, llenadas las actas y ensobrados los votos, se hará un paquete en que se pondrán los sobres de los votos a que se refiere el artículo 73, el acta de instalación y los demás útiles usados en la votación.

El paquete será cerrado y sellado. En su cubierta se anotará la hora y se firmará por todos los vocales y los apoderados que lo desearan. Luego, se dejará en poder del Comisario.”.

42) Agréguese el siguiente artículo 76 bis.

“Artículo 76 bis. La persona que disponga el Servicio Electoral se instalará en la Oficina Electoral del local de votación y procederá a recibir los ejemplares del acta señalados en el inciso sexto del artículo 72, cuyos datos procederá a ingresarlos o transmitirlos al sistema computacional en la forma que disponga el Servicio Electoral, en conformidad al artículo 175 bis.

Los apoderados acreditados ante la Oficina Electoral del Local Votación, podrán estar presentes y observar la recepción de las actas y el proceso de ingreso o transmisión de los datos que ellas contienen.

43) Agréguese el siguiente inciso final en el artículo 77:

“El Delegado de la Junta Electoral deberá concurrir personalmente al inicio de la sesión que se señala en el artículo 86 del Colegio Escrutador que corresponda, con objeto de hacer entrega personalmente de los sobre cerrados y dirigidos al Colegio Escrutador que contienen las actas de escrutinios de las mesas de votación del Local donde ejerció su función.”.

44) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 80 la expresión “Director” por “Consejo” y la expresión “, o dentro del décimo quinto día siguiente a la publicación del decreto supremo que convoca a un plebiscito.” por “o plebiscito.”.

45) Reemplázase el artículo 81, por el siguiente:

“Artículo 81.- Cada Colegio estará compuesto de seis miembros titulares e igual número de suplentes, designados por las respectivas Juntas Electorales, en conformidad a los artículos siguientes.

Se designarán tres miembros con ocasión de la elección de diputados y senadores, y tres con ocasión de la elección de alcaldes y concejales. Podrá designarse un número superior, si alguno de los designados para elecciones anteriores que deba continuar ejerciendo esta función se hubiere cambiado de Circunscripción Electoral a una que no deba escrutar el Colegio o hubiere perdido el derecho a sufragio.

No podrán ser designados como miembros de los Colegios Escrutadores las personas señaladas en el inciso primero del artículo 40, ni aquéllas que hubieren sido designadas como vocales de mesas receptoras de sufragios para la misma elección de que se trate.”.

46) Sustitúyase el artículo 82, por el siguiente:

“Artículo 82.- Para proceder a la designación de los miembros de los Colegios Escrutadores, cada uno de los miembros de la Junta Electoral respectiva escogerá veinte nombres, que deberán corresponder a veinte ciudadanos inscritos en las mesas que corresponda escrutar al Colegio respectivo. Si la Junta funcionare con dos miembros, elegirán treinta cada uno de ellos.

Al efectuar esta selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que puedan presumirse más aptas para desempeñar las funciones de miembro del Colegio Escrutador, cuyo domicilio electoral corresponda a la localidad donde sesionará el Colegio Escrutador, y que no hubieren sido seleccionadas para vocales de mesas en la misma elección.

A continuación, la Junta Electoral procederá a confeccionar una nómina para cada Colegio Escrutador que le corresponda designar, en la que se asignará a cada uno de los nombres propuestos, ordenados alfabéticamente, un número correlativo del uno al sesenta.

En sesión pública que se realizará en la oficina del Secretario, inmediatamente designados los vocales de las respectivas Mesas Receptoras de Sufragios, las Juntas Electorales efectuarán un sorteo de manera que los primeros seis números sirvan para individualizar, en cada nómina, a las personas que se desempeñarán como miembros de los Colegios Escrutadores, y los siguientes seis, en orden correlativo, a quienes deberán actuar como suplentes.

La Junta Electoral formará un libro con las nóminas alfabéticas firmadas por todos sus miembros, debidamente foliadas y con indicación del Colegio a que corresponda, el que se entenderá como parte integrante del acta del sorteo. Este libro será público y se mantendrá bajo la custodia del Secretario de la Junta Electoral.

En todo caso, las nóminas deberán encontrarse en el local donde se efectúe el sorteo respectivo.”.

47) Reemplázase el artículo 83, por el siguiente:

“Artículo 83.- El Secretario de la Junta Electoral publicará el acta de lo obrado, incluyendo las nóminas de los miembros designados para cada Colegio Escrutador, respecto de quienes se indicarán solo los apellidos y sus dos primeros nombres, en la forma establecida en el artículo 43 de esta ley, y fijará en su oficina una copia autorizada de ella a la vista del público.

Dentro del mismo plazo, comunicará su nombramiento por carta certificada a los miembros designados, indicando la fecha, hora y lugar en que el Colegio Escrutador funcionará, y el nombre de los demás integrantes. El encargado de la oficina de correos deberá otorgar recibo circunstanciado de los avisos que se entregaren.”.

48) Incorpórese el siguiente artículo 83 bis, nuevo:

“Artículo 83 bis.- Cualquier miembro de los Colegios Escrutadores podrá excusarse de desempeñar el cargo, en los plazos, formas y causales establecidas en el artículo 44.

En el mismo plazo, cualquier persona podrá solicitar la exclusión del o los miembros de un Colegio Escrutador que estuvieren afectados por alguna de las causales de inhabilidad señaladas en el artículo 81.

Para los efectos de conocer y resolver las excusas que se presentaren y reemplazar a los miembros cuya excusa o exclusión hubiere sido acordada por la Junta Electoral, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de esta ley.”.

49) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 84 la expresión “Director” por “Consejo”.

50) Reemplázase el artículo 85, por el siguiente:

“Artículo 85.- Los miembros de los Colegios Escrutadores ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron sorteados. Con todo, los miembros sorteados por las Juntas Electorales que les corresponda actuar en la elección de Presidente de la República se entenderán convocados, por el solo ministerio de la ley, para cumplir iguales funciones en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República, y en estos casos no se requerirá de la publicación y comunicación de que trata el artículo 43 de la presente ley.”.

51) Incorpórese el siguiente artículo 85 bis, nuevo:

“Artículo 85 bis.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de miembro de los Colegios Escrutadores y de Secretario de Colegio Escrutador un bono equivalente a dos tercios de Unidad de Fomento, por cada acto electoral.

Dicha cantidad no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Esta cantidad se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

Para tal efecto, las Juntas Electorales que correspondan, deberán remitir a la Tesorería General de la República, dentro de los dos días siguientes al término de la función de los Colegios Escrutadores, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la funciones respectivas en dicho organismo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.”.

52) Sustitúyase el artículo 86, por el siguiente:

“Artículo 86.- A las catorce horas del día siguiente a la elección o plebiscito, el Colegio Escrutador se reunirá con al menos tres de sus miembros, en el lugar que hubiere designado la Junta Electoral correspondiente, bajo la presidencia provisional del Secretario del Colegio, nombrado de conformidad al artículo 84. Reunido el número requerido, se procederá a sortear de entre los miembros presentes un Presidente.

Al inicio de la sesión, los delegados de las Juntas Electorales deberán entregar al Secretario los sobres sellados que contengan las actas de escrutinios de las Mesas Receptoras que hubieren funcionado en su respectivo local de votación. Éste se cerciorará del estado de los sellos y de las firmas y otorgará el recibo correspondiente, en original y copia. El Delegado conservará el original y la copia la remitirá al Secretario de la Junta Electoral.

Inmediatamente, el Presidente declarará constituido el Colegio, levantándose un acta en que se dejará constancia de los siguientes hechos y circunstancias: a) individualización del Colegio, expresándose la correspondiente región, provincia, comuna y circunscripción; b) el local de su funcionamiento; c) las Mesas que debe escrutar; d) nombre, profesión y cédula de identidad de sus miembros asistentes; e) el día y hora de la constitución del Colegio, y f) la nómina de los miembros del Colegio que no hubieren asistido a la reunión. El acta se extenderá en el Libro de Actas correspondiente y será firmada por los miembros del Colegio y el Secretario, quien deberá remitirla para los efectos de las ausencias injustificadas, al Juzgado de Policía Local correspondiente.”.

53) Reemplázase el artículo 87, por el siguiente:

“Artículo 87.- El Colegio Escrutador, en audiencia pública, procederá con la ayuda de un sistema computacional, a registrar y sumar el número de votos obtenidos por cada candidato en las mesas que debe escrutar y, además, en el caso de elecciones de Parlamentarios, a sumar los votos obtenidos por cada lista de candidatos, de acuerdo con el procedimiento del artículo siguiente. Una vez terminado dicho procedimiento se extenderá el acta y el cuadro a que se refiere el artículo 88 de esta ley.

Para efectos de lo anterior, el Servicio Electoral dotará a cada Colegio Escrutador de computador con su respectiva impresora y de un software o sistema que permita realizar el ingreso o revisión de los resultados por mesa y candidato, que proceda a realizar las sumas y emita los cuadros y actas a que se refiere el artículo 89. Además, deberá proveer de una manual para el uso de este equipo y su software.

El sistema computacional señalado en los incisos anteriores deberá tener ya registrado los resultados de cada candidato por Mesa Receptora de Sufragios, que se hubieren ingresados a los sistemas del Servicio Electoral, conforme al artículo 76 bis.”.

54) Sustitúyase el artículo 88, por el siguiente:

“Artículo 88.- El Presidente leerá el acta de la mesa en alta voz, debiendo el Secretario comprobar los resultados por candidato con los datos ya ingresados al sistema computacional, pudiendo corregirlos, modificarlos o completarlos si ellos faltaren. Los demás miembros del Colegio y los apoderados podrán comprobar la exactitud de la lectura con los datos que en definitiva queden registrados en el sistema. Cada uno de los miembros y apoderados podrán a su vez tomar nota separadamente del resultado de las actas a medida que sean leídas con el objeto de verificar los datos ingresados y las sumas de los votos obtenidos por cada candidato y lista cuando corresponda.

Si faltaren actas de Mesas que hubieren funcionado el día de la elección, se dejará constancia expresa en el acta que dichas mesas no fueron escrutadas por el Colegio. Si respecto de esas mesas, el sistema computacional tuviere registrado sus resultados en base al ingreso de datos efectuados conforme al artículo 76 bis, se dejará constancia que dichos resultados no fueron revisados por el Colegio por carecer de un ejemplar del acta.

Si las actas contuvieren errores, especialmente discrepancias, entre la suma real de los votos de cada candidato, los nulos y blancos y los totales indicados en las actas, se ingresaran igual al sistema los datos que existan, dejándose constancia en el acta de las desigualdades en la suma y de los errores que se hubiere detectado.

Terminada la lectura y el ingreso de resultados al sistema computacional, se obtendrá de este último, en forma provisoria, un cuadro de resultados, que contendrá para cada Mesa, los votos obtenidos por cada candidato y por lista si correspondiere, además de los votos nulos y blancos y el total de votos escrutados de la Mesa. Este cuadro contendrá también la suma total de votos del Colegio por cada candidato, y lista si correspondiere, además de la suma total de votos blancos y nulos y total de votos escrutados. El cuadro provisorio se emitirá con el número de copias que sea necesario para que los miembros del Colegio y los apoderados puedan revisar los datos ingresados y las sumas, a objeto de que puedan sugerir correcciones cuando consideren que existen errores.

Se efectuarán las correcciones que acuerde la unanimidad de los miembros del Colegio, así como las que acuerde la mayoría de los miembros del Colegio cuando haya discrepancias respecto

del valor correcto de un resultado ingresado, resolviendo el Secretario en caso de empate. En todo caso, se deberá dejar siempre constancia detallada en el acta de la discrepancia surgida, como también de las correcciones u observaciones requeridas por los apoderados y que el Colegio no haya considerado.”.

55) Reemplázase el artículo 89, por el siguiente:

“Artículo 89.- Terminada la revisión y resueltas las discrepancias señaladas en el artículo anterior, se obtendrá del sistema computacional el cuadro de resultados definitivo del Colegio en tres ejemplares.

Deberá levantarse un acta donde se harán constar los siguientes hechos o circunstancias:

- a) El día y la hora del término de su labor;
- b) Las cifras totales, en número y letras, alcanzadas por los candidatos y por las listas de candidatos en el caso de elecciones Parlamentarias;
- c) La cantidad de votos nulos y en blanco emitidos dentro de su territorio jurisdiccional y la circunstancia de haberse practicado la agregación a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente;
- d) Los reparos de que hubiere sido objeto el procedimiento observado al hacerse la operación;
- e) Un detalle de las mesas que el Colegio no pudo escrutar o no pudo revisar la digitación efectuada en los locales de votación en el día anterior, por no haber recibido la correspondiente acta de escrutinio.
- f) Un detalle de las mesas donde existen desigualdades en el acta entre los totales que ellos muestran y las suma de los votos por candidatos más los nulos y blancos.
- e) Todos los demás que determine esta ley o el Colegio.”.

56) Sustitúyase el inciso primero del artículo 94, por el siguiente:

“El Secretario del Colegio Electoral deberá, obtener del sistema computacional y hacer entrega de un copia certificada por él, del cuadro de resultados definitivo y del acta, a todos los apoderados y candidatos que lo soliciten.”.

57) Reemplázase el artículo 95, por el siguiente:

“Artículo 95.- El Servicio Electoral deberá dar a conocer los resultados de los escrutinios practicados por los Colegios Escrutadores a medida que vaya disponiendo de ellos.

Para estos efectos, el Director del Servicio Electoral abrirá el sobre con el acta y cuadro que hubiere recibido del Presidente de cada Colegio Escrutador, comprobará la exactitud de dichos resultados con los contenidos en el sistema computacional, efectuará las correcciones que fueren necesarias para que los resultados del sistema computacional se ajusten al acta y cuadro, y procederá a liberar su información en los términos señalados en el inciso siguiente.

Los partidos políticos que participan en la elección o plebiscito, los candidatos independientes en su caso, los medios de comunicación y el público en general, podrán acceder al sitio web que el Servicio Electoral disponga, a objeto de conocer los resultados de los Colegios Escrutadores. Los resultados deberán estar desplegados a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Los partidos políticos y los candidatos independientes que participan en la elección o plebiscito, podrán también disponer de esos mismos resultados en medios magnéticos o digitales no encriptados para efectuar los procesos que estimen convenientes.

Los resultados que entregue el Servicio Electoral en virtud de este artículo deberán señalar su condición de provisorios y sujetos al escrutinio general de los Tribunales que correspondan.

58) Agréguese al final del inciso primero del artículo 96 la siguiente letra f):

“f) La utilización de un Padrón Electoral incorrecto, que contengan omisiones de inscritos o electores con derecho a sufragio, inhabilidades mal aplicadas, errores en el domicilio electoral y la correspondiente circunscripción electoral, y en los demás datos del padrón.”.

59) Sustitúyase los incisos primero y segundo del artículo 97, por los siguientes:

“Cualquier elector podrá solicitar la rectificación de escrutinios cuando, en su opinión, se haya incurrido en omisiones, calificación errada de los votos válidos, marcados, objetados, nulos o en

blanco por parte de la mesa, errores en las actas de escrutinios, en sus sumas y totales, diferencias entre las actas o entre ellas y los certificados de escrutinios entregados a los apoderados, resultados mal imputados por los Colegios Escrutadores o en errores aritméticos.

Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad de elecciones o plebiscitos, se presentarán ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente al territorio en que se hubieren cometido los hechos que sirvan de fundamento al reclamo, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección o plebiscito, debiendo acompañarse en el mismo acto los antecedentes en que se funde. Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador, antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones, que tengan relación con la mesas de dicho Colegio Escrutador, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante.”

60) Sustitúyase el artículo 99 bis, por el siguiente:

“Artículo 99 bis.- Tratándose de la elección de Presidente de la República, las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad se interpondrán directamente ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección, acompañándose en el mismo acto los antecedentes en que aquéllas se fundaren.

Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador, antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones, que tengan relación con la mesas de dicho Colegio Escrutador, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante.

Dentro del plazo fatal de dos días, contado desde la fecha del respectivo reclamo o solicitud, se rendirán ante el Tribunal las informaciones y contrainformaciones que se produzcan. El Tribunal conocerá, adoptará las medidas para mejor resolver y emitirá su fallo dentro del plazo señalado por el artículo 27 de la Constitución Política de la República. En todo caso, dicho fallo no será susceptible de recurso alguno y su notificación se practicará por el estado diario.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Tribunal deberá además, dar cumplimiento a las normas establecidas en el Título V de la presente ley, en lo que fuere pertinente.”.

61) Agréguese el siguiente artículo 101 bis:

“Artículo 101 bis.- El Servicio Electoral deberá poner a disposición del Tribunal, los resultados de los Colegios Escrutadores que disponga, en formato digital.”

62) Reemplázase el artículo 103, por el siguiente:

“Artículo 103.- Para practicar el escrutinio general el Tribunal se apoyará en equipos y sistemas computacionales, debiendo resolver las solicitudes de rectificaciones conjuntamente con el escrutinio y observando las siguientes reglas:

1) Todas las sesiones del Tribunal que tengan por objeto practicar el escrutinio general o el escrutinio de alguna mesa en particular, serán públicas. A ellas podrán asistir los candidatos y hasta dos apoderados, designados al efecto por cada uno de los partidos políticos y por los candidatos independientes que hayan participado en la elección o plebiscito.

2) Si no se dispusiere del acta y cuadro de uno o más Colegios Escrutadores, el Tribunal requerirá del Servicio Electoral la remisión de todas las actas y cuadros que faltaren y que obren en su poder y procederá a completar el escrutinio general.

3) Respecto de todas aquellas Mesas, cuyos resultados estén contenidos en los cuadros de resultados de los Colegios Escrutadores, que no hayan sido objeto de observaciones o discrepancias, según el acta del mismo Colegio, ni hayan sido objeto de una reclamación o de una solicitud de rectificación, y siempre que sean concordantes con resultados contenidos en las actas de las mesas remitidas al Tribunal, se practicará el escrutinio general en base a los resultados de dichos cuadros sin más trámite. Para establecer la concordancia podrán usarse sistemas computacionales.

4) Si algún Colegio hubiere dejado de escrutar una o más actas de Mesas, ya sea por no haber conseguido las actas o aquéllas contuvieren errores u omisiones que impidieren conocer el resultado real y completo de la Mesa, el Tribunal recurrirá al ejemplar del acta de la mesa que le fue remitida, y procederá a completar el escrutinio.

5) Si, con todo, no fuese posible contar con uno de los ejemplares del acta de las mesas no escrutadas por el Colegio Escrutador, el Tribunal practicará el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

6) En relación a las Mesas que hayan sido objeto sólo de reclamaciones de nulidad, el Tribunal considerará provisoriamente su resultado según el cuadro del Colegio Escrutador a objeto de completar el escrutinio general y en espera de lo que resuelva posteriormente, según lo señalado en los artículos siguientes.

7) En relación a las Mesas que hayan sido objeto de observaciones, discrepancias o desigualdades, según el acta del Colegio Escrutador, o que hayan sido objeto de una solicitud de rectificación, el Tribunal procederá a revisar todos los antecedentes que obren en su poder o hayan sido presentados por los requirentes, y cotejará al menos dos ejemplares del acta de escrutinio para poder resolver la rectificación solicitada y los resultados de la Mesa, pudiendo, en caso de que lo considere necesario, proceder a practicar el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

8) En relación a las Mesas del número anterior y en el caso de que existieran discrepancias entre los resultados de al menos dos ejemplares del acta de escrutinio, o discrepancia entre las actas de escrutinio y un certificado de escrutinio emitido por el Presidente o Secretario de la misma, en virtud del N° 8 del inciso primero del artículo 71 de esta ley, que haya sido presentado en una rectificación al Tribunal, este procederá a resolver la solicitud de rectificación, practicando el escrutinio de la mesa en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral.

9) En relación a las Mesas del número 7 anterior, que hayan sido objeto de una solicitud de rectificación, fundamentada en una mala calificación de los votos que la mesa consideró validos, nulos o blancos, o que hayan sido equivocadamente asignados a otro candidato, o que siendo considerados como marcados no hayan sido contabilizados para el candidato de la preferencia, y que de estos hechos algún apoderado de mesa o vocal haya dejado observación o constancia en el acta de la mesa, o haya sido impedido por la Mesa de hacerlo, el Tribunal deberá proceder a resolver la solicitud de rectificación practicando el escrutinio de la Mesa, en conformidad a las disposiciones de esta ley, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto le remitirá el Servicio Electoral. Lo anterior procederá siempre y cuando la revisión de la totalidad de los votos alegados de todas las mesas sujetas de rectificación, pudieren dar lugar a la elección de un candidato distinto o de una opción distinta, a la que arrojan los resultados del escrutinio, de no ser revisados estos votos.”.

63) Agréguese el siguiente inciso final en el artículo 110:

“Los encargados del orden público se constituirán en los locales de votación a partir de las 14 horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito.”

64) Modifíquese el artículo 115 de la siguiente forma:

a) Elimínese del inciso final la expresión “de la respectiva localidad”.

b) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“Cualquier local público o privado en el que, en el período señalado, se realicen actividades de propaganda o se desarrollen reuniones de carácter electoral, salvo las señaladas en el artículo 158, será clausurado por la fuerza encargada del orden público, hasta dos horas después de haberse cerrado la votación.”.

65) Reemplázase el artículo 116, por el siguiente:

“Artículo 116.- El día de una elección o plebiscito, hasta dos horas después del cierre de la votación, no podrán realizarse espectáculos o eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo, cuando la fuerza encargada del orden público estime que éstos podrían afectar el normal desarrollo del proceso electoral.

El día de la elección o plebiscito, entre las cinco horas de la mañana y dos horas después del cierre de la votación, los establecimientos comerciales no podrán expender bebidas alcohólicas para su consumo en el local o fuera de él, exceptuándose solo a los hoteles respecto de los pasajeros que pernocten en ellos.

La fuerza encargada del orden público dispondrá la clausura de los recintos en que se infringere esta disposición.”.

66) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 117 la expresión “deberán” por “podrán”.

67) Sustitúyase los números 3) y 6) del artículo 132, por los siguientes:

“3) Admitir el sufragio de personas que no aparezcan en el padrón de la Mesa o que no exhiban su cédula nacional de identidad, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros vigentes según corresponda;”

“6) Impedir la presencia de algún apoderado o miembro de la Mesa, sin perjuicio de lo señalado en el inciso quinto del artículo 57;”

68) Sustitúyase los números 4) y 8) del artículo 136, por los siguientes:

“4) El que falsificare, sustrajere, ocultare o destruyere algún Padrón de Mesa, acta de escrutinio o cédula electoral;”

“8) El que impidiera a cualquier elector ejercer su derecho a sufragar por medios violentos, amenazas o privándolo de su cédula nacional de identidad, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros, y”.

69) Sustitúyase el artículo 139 por el siguiente:

“Artículo 139.- A quienes perciban maliciosamente los bonos a que se refieren el artículo 47 bis y 85 bis, sufrirán la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, sin perjuicio del reintegro de las sumas percibidas indebidamente.”.

70) Elimínese del artículo 140 la expresión “, para no sufragar”.

71) Reemplázase el artículo 153, por el siguiente:

“Artículo 153.- Terminado el proceso de calificación de una elección o plebiscito, el Director del Servicio Electoral denunciará, ante los jueces de Policía Local de la comuna correspondiente a la respectiva circunscripción electoral, a los miembros de las Juntas Electorales, Mesas Receptoras, Colegios Escrutadores y Delegados de las primeras, que hubieren incurrido en omisiones en el cumplimiento de las funciones que establece esta ley.”.

72) Elimínese del inciso primero del artículo 157 la expresión “independientes, en su caso,”.

73) Reemplázase el artículo 158, por el siguiente:

“Artículo 158.- Las sedes oficiales de los partidos políticos y de los candidatos, en su caso, podrán funcionar aún en el día de la elección, especialmente para efectos de atender, preparar y distribuir a los apoderados y entregarles su materiales y recibir copias de las actas de escrutinios. También podrán seguir los escrutinios conforme al artículo 175 bis, sin que les sea permitido realizar propaganda electoral o política, atender electores o realizar reuniones de carácter político antes del cierre de las mesas de votación.”

74) Reemplázase el artículo 159, por el siguiente:

“Artículo 159.- Los candidatos a Presidente de la República, los partidos que participen en una elección y los candidatos independientes, podrán designar un apoderado con derecho a voz, pero sin voto, para que asista a las actuaciones que establece esta ley de las respectivas Juntas Electorales, Mesas Receptoras de Sufragios, Colegios Escrutadores, Oficinas Electorales que funcionen en los locales de votación, Tribunales Electorales Regionales y Tribunal Calificador de Elecciones. El mismo derecho tendrán los partidos políticos y los parlamentarios independientes en los plebiscitos nacionales. Tratándose de plebiscitos comunales, este derecho solo corresponderá a las organizaciones comunitarias y actividades relevantes de la respectiva comuna o agrupación de comunas.

Podrá designarse también un Apoderado General titular y uno suplente por cada recinto o local de votación en que funcionaren Mesas Receptoras de Sufragios, para la atención de los apoderados de Mesas.

Servirá de título suficiente para los apoderados generales de local, titular o suplente, así como para los apoderados ante las Juntas Electorales, Colegios Escrutadores, Tribunales Electorales y Tribunal Calificador de Elecciones, el nombramiento mediante un poder autorizado ante notario que se les otorgue por los encargados electorales a que se refiere el artículo 7°. En el caso de los apoderados de Mesa y los apoderados ante la Oficina Electoral del local de votación, servirá de título suficiente un poder simple otorgado por un apoderado general, sea titular o suplente, que esté presente en el local de votación.

En el nombramiento deberá indicarse los nombres y apellidos y la cédula nacional de identidad del apoderado, el candidato o partido que representa, y la Junta, Mesa, Local, Colegio, Oficina Electoral o Tribunal ante el cual se acredita. La omisión de cualquiera de esos antecedentes invalidará el nombramiento.

En los plebiscitos, los nombramientos de apoderados que corresponden a los encargados electorales del artículo 7°, serán efectuados por el Presidente y el Secretario del Consejo Regional del partido o por el parlamentario independiente, en su caso.

75) Sustitúyase el artículo 160, por el siguiente:

“Artículo 160.- Para ser designado apoderado, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio y no haber sido condenado por delitos sancionados por esta ley o por cualquiera de las leyes que regulan el Sistema Electoral Público. Esta última condición se presumirá

siempre existente mientras no se pruebe lo contrario ante el Presidente de la respectiva Junta, Mesa o Colegio.

Con todo, no podrán ser designados apoderados los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Consejeros Regionales, Gobernadores y Alcaldes; los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local, los jefes superiores de Servicio y Secretarios Regionales Ministeriales; el Contralor General de la República ni los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en servicio activo. Tampoco podrán serlo los no videntes y los analfabetos.

76) Sustitúyase el artículo 161, por el siguiente:

“Artículo 161.- Si dos o más ciudadanos exhibieren simultáneamente una designación de apoderado ante una misma Junta, Local de Votación, Colegio o Tribunal, se estimará válida la que tuviere fecha posterior. Si tuvieran la misma fecha, se preferirá a aquél de más edad. En el caso de apoderados de Mesa o ante la Oficinas Electorales se estará a lo que resuelva el apoderado general de local.”.

77) Sustitúyase el artículo 162, por el siguiente:

“Artículo 162.- Los apoderados generales de Local, de Mesa y ante la Oficina Electoral del Local, se identificarán con un credencial durante el día de la elección o plebiscito, que señale al candidato o partido que representan y que deberán colgar en su pecho. Podrán también contar con una carpeta para guardar su material de trabajo. El contenido, tamaño y formato de la credencial y carpeta serán regulados por resolución del Consejo del Servicio Electoral.

Los encargados electorales mencionados en el artículo 7°, deberán someter ante el Servicio Electoral el formato de las carpetas y credenciales que usarán sus representados, dentro de los cuarenta y cinco días antes de la elección, para que sea aprobada o rechazada por el Servicio en un plazo no superior a los cinco días de presentada.

Los apoderados tendrán derecho a instalarse en los locales de votación o al lado de los miembros de las Mesas Receptoras, en las Juntas Electorales, Colegios Escrutadores, Oficinas Electorales o Tribunales Electorales, observar los procedimientos, formular las objeciones que estimaren convenientes y, cuando corresponda, exigir que se deje constancia de ellas en las actas respectivas, verificar u objetar la identidad de los electores y, en general, tendrán derecho a todo lo que conduzca al buen desempeño de sus mandatos.

La Junta, Mesa o Colegio, deberá hacer constar en acta los hechos cuya anotación pida cualquier apoderado y no podrá denegar el testimonio por motivo alguno.”.

78) Derógase el artículo 171.

79) Derógase el artículo 171 bis.

80) Derógase el artículo 173.

81) Reemplázase el artículo 174, por el siguiente:

“Artículo 174.- Las elecciones de Diputados y Senadores se harán conjuntamente pero en cédulas separadas, el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquél en que deban renovarse la Cámara de Diputados y el Senado.”

82) Reemplázase el artículo 175, por el siguiente:

Artículo 175.- El Director del Servicio Electoral deberá entregar a los partidos políticos y a los candidatos independientes, dentro de los treinta días contados desde la fecha del término de la calificación de una elección o plebiscito, el resultado completo de la elección, en medios magnéticos o digitales no encriptados. Deberán detallarse a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, circunscripción electoral, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Al efecto, el Tribunal Calificador de Elecciones pondrá los referidos resultados a disposición del Director, dentro de los diez días siguientes al término de la calificación.

83) Reemplázase el artículo 175 bis, por el siguiente:

“Artículo 175 bis.- Con objeto de mantener informada a la opinión pública del desarrollo de toda elección o plebiscito, el Servicio Electoral emitirá boletines y desplegará información en su sitio web, respecto de la instalación de las mesas de votación y sobre los resultados que se vayan produciendo, a medida que las mesas culminen su proceso de escrutinio.

Para estos efectos, el Servicio Electoral acreditará, en cada local de votación, una persona en la Oficina Electoral del local de votación, que será responsable de recepcionar las copias del acta de las mesas señalada en el inciso sexto del artículo 72, e ingresar los resultados al sistema computacional en los términos señalados en el artículo 76 bis, o en

defecto de sistema computacional, remitirla al Servicio Electoral en la forma que éste determine.

Para el adecuado desempeño de este funcionario, las municipalidades deberán habilitarle, instalación eléctrica en la Oficina Electoral del Local de Votación.

Los partidos políticos que participan en la elección o plebiscito, los candidatos independientes en su caso, los medios de comunicación y el público en general, podrán acceder al sitio web que el Servicio Electoral disponga, a objeto de conocer los resultados de la elección, a medida que se vayan ingresando al sistema computacional conforme al artículo 76 bis. Los resultados deberán estar desplegados a nivel de Mesa Receptora de Sufragios, como a niveles agregados, de Colegio Escrutador, de comuna, circunscripción electoral, provincia, región y país, como también de distrito y circunscripción senatorial.

Los partidos políticos, los candidatos independientes que participan en la elección o plebiscito y los medios de comunicación que lo soliciten al Servicio Electoral, podrán también acceder a esos mismos resultados en archivos magnéticos o digitales no encriptados para efectuar los procesos que estimen convenientes.

El Servicio Electoral emitirá boletines parciales y final con los resultados de la elección o plebiscito.

Los resultados que entregue el Servicio Electoral en virtud de este artículo, tendrán carácter meramente informativo y no constituirán escrutinio para efecto legal alguno, debiendo señalar esta condición en sus informes o boletines.”.

84) Deróguese el artículo 176.

85) Agréguese, a continuación del Título Final, que pasa a ser Título XI, el siguiente Título XII nuevo:

“TITULO XII DE LAS JUNTAS ELECTORALES

Artículo 182.- En cada provincia habrá una Junta Electoral que tendrá las funciones que esta ley y las demás leyes le encomienden.

Artículo 183.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio Electoral, por acuerdo de su Consejo, mediante resolución del Director y previo informe de la Junta respectiva, podrá crear

temporal o permanentemente otras Juntas Electorales, cuando circunstancias tales como la cantidad de población, la dificultad de comunicaciones o las distancias entre los diversos centros poblados lo hagan aconsejable.

La resolución designará a los integrantes de las nuevas Juntas Electorales, establecerá su territorio jurisdiccional y la localidad en que tendrán su sede. Dicha resolución se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en un periódico de la localidad respectiva. En caso que no lo hubiere, la publicación se realizará en un periódico correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 184.- Las Juntas Electorales, en las provincias cuya capital sea asiento de Corte de Apelaciones, estarán integradas por el Fiscal Judicial de esta última, el Defensor Público de la capital de la provincia y el Conservador de Bienes Raíces de la misma. Actuará de Presidente el primero de los nombrados y de Secretario el último.

En las demás capitales de provincia, las Juntas se integrarán con el Defensor Público, el Notario Público y el Conservador de Bienes Raíces de ellas. Actuará de Presidente el primero de los nombrados y de Secretario el último.

Si hubiere más de uno de los funcionarios mencionados en los incisos precedentes, integrará la respectiva Junta el más antiguo de ellos en la categoría respectiva.

Los miembros de las Juntas Electorales serán permanentes y conservarán ese carácter en tanto desempeñen la función pública requerida para su designación.

Artículo 185.- Las Juntas Electorales que cree el Servicio Electoral de acuerdo con las normas del artículo 183 de esta ley, se integrarán con el Defensor Público, un Notario y un Conservador de Bienes Raíces que tengan competencia en todo o parte del territorio jurisdiccional que se les asigne y, si hubiere más de uno de ellos, por los que tengan su oficio en la localidad en que tendrá su sede la respectiva Junta, de acuerdo con su antigüedad en la categoría, excluidos los que deban integrar otras Juntas de conformidad con los incisos primero y segundo del artículo anterior.

Si no hubiere alguno de los auxiliares de la administración de justicia señalados en el inciso anterior, la Junta Electoral se integrará con un Secretario del Juzgado de Letras, con otro Notario o con el Secretario Municipal de la Municipalidad que tenga asiento en la localidad

sede de la Junta. Sin embargo, la falta de Conservador solo podrá ser suplida por un Archivero Judicial o un Notario.

En estas Juntas actuará como Presidente el Defensor Público o, en su defecto, el miembro que designe el Servicio Electoral, y como Secretario el Conservador de Bienes Raíces o, a falta de éste, el Archivero Judicial o el Notario que nomine el Servicio Electoral. La permanencia de sus miembros será la misma indicada en el inciso final del artículo anterior.

Artículo 186.- Para los efectos de la designación de los integrantes de las Juntas Electorales, el Servicio Electoral requerirá de la Corte Suprema la nómina de los correspondientes funcionarios y auxiliares de la administración de justicia, con jurisdicción en el territorio de competencia de la Junta.

Los miembros serán notificados de su designación por el Secretario de la Corte de Apelaciones respectiva, a requerimiento del Servicio Electoral. La notificación se hará personalmente o por carta certificada que contendrá copia íntegra de la resolución. Se entenderá practicada esta última notificación al tercer día hábil siguiente de la recepción de la carta por la oficina de correos.

Las Juntas Electorales se instalarán el quinto día siguiente a la notificación del último de sus miembros, a las quince horas.

Artículo 187.- Si en alguna provincia no se reune el número de funcionarios suficientes para integrar una Junta Electoral, el Servicio Electoral dispondrá, mediante resolución fundada, que será publicada en la forma señalada en el artículo 183 de esta ley, que sus funciones sean cumplidas por la Junta Electoral de la provincia de la misma Región que tenga mayores facilidades de comunicación terrestre con aquélla.

Artículo 188.- Las Juntas Electorales celebrarán sus sesiones en el oficio del Secretario y podrán funcionar válidamente con dos de sus miembros. Si faltare alguno de ellos será sustituido por la persona a quien corresponda reemplazarlo en sus funciones.

Corresponderá a los Presidentes velar por el fiel y oportuno cumplimiento de las funciones que la ley encomienda a las Juntas. Podrán convocarlas cuando lo estimen necesario o lo pidan otros miembros. Las Juntas se reunirán, además, en las ocasiones que señale la ley o cuando hubiere asuntos que requieran de su conocimiento, situación que los Secretarios informarán de inmediato a los Presidentes, caso en el cual aquéllos efectuarán las citaciones correspondientes.

Artículo 189.- De todas las actuaciones de la Junta se levantarán actas que se estamparán en un libro denominado Protocolo Electoral. En ellas se indicará la fecha de la sesión, la individualización de los miembros asistentes, las materias tratadas y las resoluciones adoptadas. Estas actas serán firmadas por todos los miembros asistentes.

El Protocolo Electoral será público y se sujetará a las reglas que rigen los registros notariales. Copia de él, deberá remitirse al Servicio Electoral para su publicación en su sitio web.

El Protocolo se mantendrá bajo la custodia del Secretario de la Junta Electoral.”.

Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior:

1) Reemplázase, en el artículo 99, la expresión “inscritos en los Registros Electorales de” por “habilitados para votar en”.

2) Sustitúyase, en el artículo 100, la frase “inscritos en los Registros Electorales de la comuna” por “habilitados para votar en la comuna”.

3) Modifícase el artículo 101 en la siguiente forma:

a) Sustitúyase, el inciso segundo, por el siguiente:

“El decreto contendrá la o las cuestiones sometidas a plebiscito. La votación plebiscitaria se celebrará ciento veinte días después de la publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente”.

b) Reemplázase, en su inciso tercero, la expresión “inscritos en los Registros Electorales de” por “habilitados para votar en”.

c) Derógase el inciso cuarto.

4) Modifíquese el artículo 107 de la siguiente forma:

a) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“La falsedad de cualquiera de los hechos aseverados en la declaración mencionada en el artículo 3 de la ley N°

18.700, o su omisión, producen la nulidad de la declaración de ese candidato y la de todos sus efectos legales posteriores, incluyendo su elección.”.

b) Sustitúyase el inciso quinto por el siguiente:

“En lo demás, las declaraciones de candidaturas se regirán por los artículos 3°, con excepción del inciso tercero para el caso de los concejales, 3° bis, con excepción de su inciso tercero, 4°, incisos segundo y siguientes, y 5° de la ley 18.700.”

c) Agréguese el siguiente inciso final:

“Las declaraciones de candidaturas de concejales deberán ser presentadas por los partidos políticos o pactos electorales en un solo acto respecto de cada comuna.”

5) Sustitúyase el artículo 110, por el siguiente:

“Artículo 110.- Las declaraciones de pactos electorales, de los subpactos que se acuerden, así como la o las comunas excluidas de los subpactos, deberán constar en un único instrumento y su entrega se formalizará en un solo acto ante el Director del Servicio Electoral, dentro del mismo plazo establecido en el artículo 107 y en forma previa a las declaraciones de candidaturas.”.

6) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 113, la frase “inscritos en los registros electorales de” por “habilitados para votar en”.

7) Sustitúyase el artículo 119, por el siguiente:

“Artículo 119.- El escrutinio general y la calificación de las elecciones municipales serán practicados por los tribunales electorales regionales, en conformidad a los Títulos IV y V de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, teniendo, en cuanto les fueren aplicables, todas las facultades que se conceden al Tribunal Calificador de Elecciones.

Las resoluciones que dicten los Tribunales Electorales Regionales, en el marco de la competencia que se les confiere por la presente ley, serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

El plazo para comparecer en segunda instancia será el segundo día contado desde el respectivo certificado de ingreso. La resolución que proclame a los candidatos definitivamente electos, no será susceptible de recurso alguno.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, las instancias jurisdiccionales electorales deberán poner en conocimiento del Juzgado de Garantía competente, aquellos hechos o circunstancias fundantes de la reclamación, que a su juicio revistieren las características de delito.”.

Artículo 4º.- Modifícase el inciso tercero del artículo 83 de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, reemplazando la expresión “inscritos en los registros electorales de la provincia respectiva” por “con derecho a sufragio que hubieren sufragado en la respectiva provincia en la última elección municipal”.

Artículo 5º.- Incorpórense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos:

1) Derógase, en el inciso primero del artículo 2º, la frase “Asimismo, podrán asistir, sólo con derecho a voz, mediante un representante debidamente acreditado en la forma que señale el Director de Servicio electoral, a las actividades de las Juntas Inscriptoras establecidas por la ley N° 18.556.”

2) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 5º, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

3) Modifícase el artículo 6º de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en los incisos primero y segundo, las expresiones “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “inscrito en los Registros Electorales de” por “habilitado para votar en”.

4) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 18, la expresión “inscrito en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.

5) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 27, la expresión “estar inscrito en los Registros Electorales de la Región” por “que el domicilio electoral esté ubicado en una circunscripción de la Región”.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral:

1) Modifícase el artículo 4° de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “electores”.

b) Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión “inscritos en los Registro Electorales” por “electores”.

c) Reemplázase, en el inciso quinto, la expresión “inscritos en los Registros Electorales del”, por “electores en el”.

2) Sustitúyase el artículo 30, por el siguiente:

“Artículo 30.- Todo candidato a Presidente de la República, a Senador o a Diputado, deberá nombrar un Administrador Electoral, el que actuará como mandatario respecto de las funciones de control de los ingresos y gastos electorales que esta ley le asigna. Igual obligación pesará en el caso de candidatos a alcalde o a concejal. Si no se efectuare la designación las funciones de Administrador Electoral recaerán en el propio candidato.

Una misma persona podrá ejercer como Administrador Electoral para más de un candidato, siempre que las respectivas candidaturas hayan sido declaradas por un mismo partido político o pacto.

El nombramiento de éste deberá efectuarse ante el Director del Servicio Electoral, al momento de la declaración de la correspondiente candidatura o en la declaración jurada a que se refiere el inciso cuarto del artículo 3° de la ley N° 18.700.

La designación se formalizará por escrito, indicándose el nombre, cédula de identidad y domicilio del respectivo Administrador, el que deberá también suscribir este documento en señal de aceptación del cargo.

Este nombramiento podrá ser dejado sin efecto en cualquier momento, mediante comunicación del candidato correspondiente al Director del Servicio Electoral, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 37.

3) Sustitúyase el artículo 32, por el siguiente:

“Artículo 32.- Cualquier militante del respectivo partido político en las elecciones de Presidente de la República, de senadores, de diputados y de alcaldes y concejales, podrá ejercer el cargo de Administrador Electoral General.

El nombramiento de éste deberá efectuarse por el partido político ante el Director del Servicio Electoral, en la forma que establece el inciso cuarto del artículo 30, en forma previa a la declaraciones de candidaturas.”

4) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 34, la expresión “inscritos en los Registros Electorales” por “con derecho a sufragio”.”.

Artículo 7°.- Modifíquese el artículo 9 de la ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones, de la siguiente forma:

a) sustitúyase al final del texto de la letra d) la expresión “, y” por un punto y coma.

b) Agréguese la siguiente letra e) pasando la actual a ser letra f):

“e) Reglamentar los procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales, en la forma señalada en el artículo 12 y consultando previamente la opinión de éstos, y”.

Artículo 8°.- El mayor gasto que irrogue la aplicación de la presente ley se financiará con los recursos que se aprueben en los respectivos presupuestos anuales del Servicio Electoral.

Artículo 9°.- La presente ley comenzará a regir 60 días después de su publicación en el Diario Oficial. Salvo en lo que se refiere al artículo 23 de la ley N° 18.556, que comenzará a regir el primer día hábil del tercer mes siguiente al de la publicación de la ley.”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero Transitorio.- Las Juntas Inscriptoras en actual funcionamiento dejarán de recibir inscripciones desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. A contar de esa fecha, las Juntas Inscriptoras tendrán un plazo de 5 días para remitir al Servicio

Electoral todos los Registros Electorales de que dispongan, tanto en uso como en blanco.

Los secretarios de Juntas Electorales, en el plazo de veinte días desde la entrada en vigencia de esta ley, harán entrega al Servicio Electoral, en la forma que su Director disponga, de todos los ejemplares de los archivos electorales locales a su cargo.

El Director del Servicio Electoral dispondrá la inutilización y destrucción de esos ejemplares dentro del plazo de ocho meses, desde la vigencia de esta ley, previa su microfilmación.

Artículo Segundo Transitorio.- Todas las personas que a la entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren inscritas en los registros electorales de conformidad a la Ley 18.556, serán inscritas sin más trámite en el Registro Electoral manteniendo la misma mesa receptora de sufragios o registro.

Respecto de estas personas ya inscritas, el servicio Electoral queda eximido del deber de comunicar sus inscripciones, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 7º de la ley N° 18.556.

Artículo Tercero Transitorio.- Respecto de los chilenos y extranjeros no inscritos en los registros electorales, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cumplan con los requisitos para ser inscritos automáticamente en el Registro Electoral, serán inscritos en él de conformidad a las reglas que a continuación se indican.

El Servicio Electoral asignará a los nuevos electores, a mesas receptoras de sufragio de la circunscripción electoral que corresponda a su domicilio electoral, distinguiendo entre hombres y mujeres. Los hombres serán inscritos siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, en las mesas de mujeres existentes en la circunscripción, que tengan menos de trescientos cincuenta electores, hasta completar dicho número. Las mujeres serán inscritas siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, en las mesas de hombres existentes que tengan menos de trescientos cincuenta electores, hasta completar dicho número.

Si realizado lo anterior, quedarán electores por asignar, ellos serán destinados sin distinción de sexo, siguiendo el orden correlativo de su rol único nacional, a nuevas mesas que se crearán para estos efectos en la circunscripción electoral, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores.

El Servicio Electoral notificará a los electores señalados en los incisos anteriores, mediante carta certificada, del hecho de

su inscripción, así como de la circunscripción y Mesa Receptora de Sufragios en la que hubieren sido inscritos.”.

Artículo Cuarto Transitorio.- Las mesas o registros existentes a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley se identificarán con una letra y un número. Las antiguas mesas o registros de varones con la letra “V” y las antiguas mesas o registros de mujeres con la letra “M”, y el número corresponderá al que actualmente tienen de acuerdo con la circunscripción electoral a la que corresponden.

Las nuevas mesas que se creen en virtud de esta ley, se identificarán sólo por un número, dicho número se asignará en forma correlativa, partiendo desde el número de mesa o registro más alto existente en la circunscripción electoral incrementado en uno.

Artículo Quinto Transitorio.- En la primera elección o plebiscito que se realice después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, las Juntas Electorales procederán con ocasión de la designación de vocales, a sortear tres de los cinco vocales que ejercieron en la última elección, quienes mantendrán su condición de vocales hasta la elección anterior a la de Diputados y Senadores. Respecto de los demás vocales se aplicará lo señalado en el artículo 41 de la ley N° 18.700.

En la primera elección o plebiscito que se realice después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, las Juntas Electorales procederán con ocasión de la designación de miembros de los Colegios Escrutadores, a sortear tres de los seis que eligieron, quienes mantendrán su condición de miembro del Colegio Escrutador hasta la elección anterior a la de Diputados y Senadores. Respecto de los demás miembros de los Colegios Escrutadores se aplicará lo señalado en los artículos 82 y 85 de la ley N° 18.700.

Artículo Sexto Transitorio.- La primera de las revisiones anuales que deberán realizar las empresas de auditoría, según lo dispuesto en el artículo 41 de la ley N° 18.556, deberá efectuarse cinco meses después de la publicación la presente ley.

Artículo Séptimo Transitorio.- En la primera propuesta que deba hacer el Presidente de la República respecto de los cuatro consejeros conforme al inciso primero del artículo 62 de la ley N° 18.556, deberá indicar los dos consejeros que durarán cuatro años en su cargo y los dos que durarán ocho años.

El primer Consejero designado por el Presidente de la República conforme al inciso segundo del artículo 62 de la ley

N° 18.556, durará en su cargo hasta 30 días después de terminado el período presidencial.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 20 de diciembre de 2010, 10 de enero, 14 de marzo y 4 de abril, todas de 2011, con asistencia de sus miembros Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela (Presidenta) (Jaime Quintana Leal), y señores Andrés Chadwick Piñera, Alberto Espina Otero, Hernán Larraín Fernández y Patricio Walker Prieto.

Sala de la Comisión, a 8 de abril de 2011.

RODRIGO PINEDA GARFIAS
Secretario

RESÚMEN EJECUTIVO

PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA, SERVICIO ELECTORAL Y SISTEMA DE VOTACIONES (BOLETÍN Nº 7.338-07)

I.- PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO:

- incorporar un sistema de Registro Electoral con real inscripción automática y cambio de domicilio electoral;
- modificar el Servicio Electoral en su organización, estructura y funciones, y
- modernizar el sistema de votaciones en lo relativo a la inscripción de candidaturas; vocales de mesa; delegados de la Junta Electoral; funcionamiento de las mesas receptoras de sufragios; escrutinio de los votos y procedimientos y funciones del tribunal Calificador de Elecciones.

II.- ACUERDOS: aprobado en general en forma unánime (5 x 0).

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO: consta de nueve artículos permanentes -algunos de los cuales se componen, a su vez, de numerosos preceptos- y de siete disposiciones transitorias.

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: por tratar materias comprendidas en leyes de carácter orgánico constitucional, los preceptos de la iniciativa tienen también esa condición y, por tanto, requieren del voto favorable de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, salvo sus artículos 6°, 8° y 9°, que son normas de ley común.

V.- URGENCIA: Suma.

VI.- ORIGEN DE LA INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primer trámite.

VIII.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe.

IX.- LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- a) La Constitución Política de la República consagra, en su Capítulo II contiene las normas básicas sobre nacionalidad y ciudadanía. En especial, los artículos 13 indica quiénes son ciudadanos chilenos y el 18 dispone que habrá un sistema electoral público.
- b) La ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistemas de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
- c) La ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
- d) La ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- e) La ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
- f) La ley N° 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos.
- g) La ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.
- h) El Código Orgánico de Tribunales.
- i) La ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones.

Valparaíso, 8 de abril de 2011.

RODRIGO PINEDA GARFIAS
Secretario

INDICE

	Página
Constancias reglamentarias	2
Antecedentes:	
- Jurídicos	2
- De hecho	3
Opinión Excma. Corte Suprema:	10
Discusión en general	24
Aprobación en general	28
Texto del proyecto de ley	29
Resumen ejecutivo	96
Informe Financiero:	99

- - -

INFORME FINANCIERO

PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA INSCRIPCION AUTOMATICA, MODIFICA EL SERVICIO ELECTORAL Y MODERNIZA EL SISTEMA DE VOTACIONES. (MENSAJE N°478-358)

El mayor gasto que implica este proyecto de ley para el Servicio Electoral y el Tesoro Público es el siguiente:

	<u>Miles \$</u>
Gasto por una sola vez:	2.721.430
-Compra de Hardware, Software, Notificación nuevos electores y difusión, Cierre del proceso actual y plataformas web para cambio de domicilio y acceso al Servicio de Registro Civil e Identificación.	
Gastos en años de elecciones:	3.032.809
-Bonos a delegados de Local de votación, de Asesores, de Secretarios e Integrantes del Colegio Escrutador y del personal para recopilar cómputos, sistema escrutinios provisionales.	
-Notificación a inhabilitados y confección de padrones de mesa.	
-Diseño Sistema Computacional de captura y transmisión de cómputos.	
-Honorarios para elaboración de software adicionales.	
Gastos Anuales Permanentes:	1.426.578
-Dieta al Directorio	
-Envío de cartas a nuevos inscritos, por cambio de domicilio, confección de formularios para cambio de domicilio electoral.	
-Mantención de línea dedicada para acceso a Servicio de Registro Civil e Identificación y línea 800 (Consultas).	
-Auditorías al Padrón Electoral (2)	
TOTAL SERVICIO	7.180.817
Pagos a Vocales:	2.434.022
-Bono a Vocales de Mesa	
TOTAL TESORO PÚBLICO	2.434.022
TOTAL INDICACIONES	9.614.839

Este Informe Financiero sustituye el N° 027, del 31 de mayo del 2010. El gasto fiscal para el año 2011 se financiará con cargo a los recursos contemplados en el presupuesto del Servicio Electoral y, en lo que no alcanzare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público 50-01-03-24-03-104.


DIRECTOR
ROSANNA COSTA COSTA
 Director de Presupuestos

2010